



**MEMORIA ANUAL
CONSELLO
GALEGO DOS
PROCURADORES**

2024



ÍNDICE

1. Presentación	3
2. Composición y junta de gobierno	4
3. Sesiones Consello Galego dos Procuradores	8
4. Informe anual de gestión económica	9
5. Actividad	18
6. Expedientes	67

Diseño y maquetación:



1. PRESENTACIÓN

El Consello Galego de Procuradores es una Corporación de Derecho Público, constituida mediante Decreto 248/2000, de 29 de Septiembre, (DOG 19 de Octubre), con personalidad jurídica propia y plena capacidad para el cumplimiento de sus fines, con ámbito autonómico y que tiene por objeto, básicamente, agrupar y coordinar los Colegios de Procuradores de Galicia y asumir su representación en cuestiones de interés común profesional ante los poderes públicos autonómicos. En su respectivo ámbito de actuación cada Colegio de Procuradores de los Tribunales es totalmente autónomo y tiene, separada e individualmente, personalidad jurídica propia.

Está integrado por los Ilustres Colegios de Procuradores de A Coruña, Lugo, Ourense, Pontevedra, Santiago de Compostela y Vigo.

La representación del CGP corresponde a su Presidente, cargo que ostenta durante el año al que se contrae la presente memoria, D. José Antonio Fandiño Carnero, Decano del Illtre. Colegio de Procuradores de Vigo.



2. COMPOSICIÓN Y JUNTA DE GOBIERNO

El CGP tiene la siguiente composición:

- 1.-La Junta de Gobierno.
- 2.-La Presidencia.
- 3.-La Secretaría.

La Junta de Gobierno está constituida por todos los decanos de los Colegios de Procuradores de los Tribunales de Galicia, un miembro de cada una de las Juntas de Gobierno y los exdecanos inmediatamente anteriores de cada colegio.

Los miembros de la Junta de Gobierno son los siguientes:

PRESIDENTE: D. JOSE ANTONIO FANDIÑO CARNERO, Decano del Colegio de Procuradores de Vigo.

SECRETARIA: D^a. NATIVIDAD ALFONSIN SOMOZA, secretaria del Colegio de Procuradores de Santiago de Compostela.

VICEPRESIDENTE: D. JAVIER CARLOS SANCHEZ GARCIA, Decano del Colegio de Procuradores de A Coruña.

TESORERO: D. FERNANDO GONZÁLEZ-CONCHEIRO ALVAREZ, Decano del Colegio de Procuradores de Santiago de Compostela

CONSEJERA: D^a. CARMEN BELO GONZALEZ, Vicedecana del Colegio de Procuradores de A Coruña

CONSEJERO: D. EDUARDO FARIÑAS CORTIÑAS, Vocal del Colegio de



Procuradores de A Coruña.

CONSEJERA: D^a. MARIA ISABEL DE LA FUENTE MORADO, Decano del Colegio de Procuradores de Lugo.

CONSEJERO: D. JOSE ANGEL PARDO PAZ, Exdecano del Colegio de Procuradores de Lugo.

CONSEJERA: D^a. MARIA OLIVA ACUÑA SANTAMARINA, Vocal del Colegio de Procuradores de Lugo.

CONSEJERO: D. RAFAEL RODRIGUEZ GUTIERREZ, Vocal del Colegio de Procuradores de Lugo.

CONSEJERO: D. ENRIQUE TOVA LOPEZ-CUEVILLAS, Vocal del Colegio de Procuradores de Ourense.

CONSEJERA: D^a. ANA MARIA LOPEZ CALVETE, Vicedecana del Colegio de Procuradores de Ourense.

CONSEJERO: D. ANGEL SOTO PEREZ, Vocal del Colegio de Procuradores de Ourense.

CONSEJERO: D. JOAQUIN GABRIEL SANTOS CONDE, Decano del Colegio de Procuradores de Pontevedra.

CONSEJERA: D^a. ELENA MONTANS ARGÜELLO, Vicedecana del Colegio de Procuradores de Pontevedra.

CONSEJERO: D. FAUSTINO JAVIER MAQUIEIRA GESTEIRA, Secretario del Colegio de Procuradores de Pontevedra.

CONSEJERA: D^a. GISELA ALVAREZ VAZQUEZ, Vicedecana del Colegio de Pro-



curadores de Vigo.

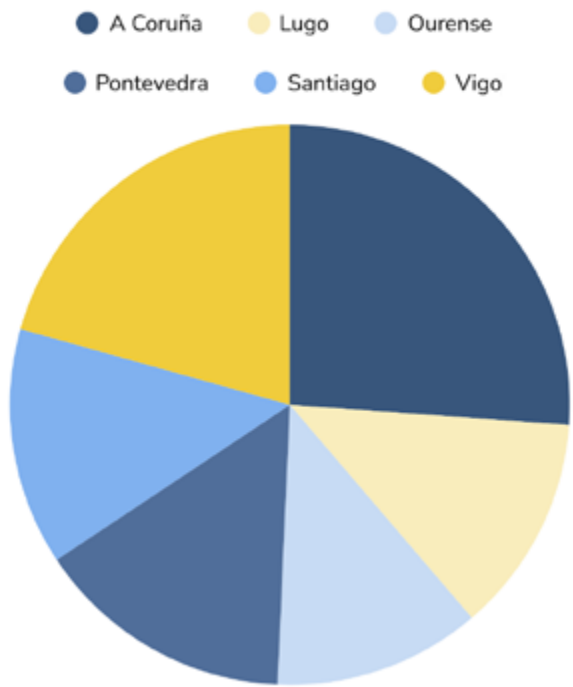
CONSEJERO: D. JOSE RAMON CURBERA FERNANDEZ, Secretario del Colegio de Procuradores de Vigo.

CONSEJERA: D^ª. YOLANDA VIDAL VIÑAS, Vicesecretaria del Colegio de Procuradores de Santiago.

El número total de Procuradores colegiados en la Comunidad Autónoma de Galicia durante el año 2024 es de 635 ejercientes y 84 no ejercientes. A continuación, se desglosa el número de colegiados ejercientes y no ejercientes correspondientes a cada Colegio de la Comunidad.



COLEGIO DE PROCURADORES	COL. EJERCIENTES	COL. NO EJERCIENTES
A CORUÑA	166	52
LUGO	80	11
OURENSE	76	4
PONTEVEDRA	95	5
SANTIAGO	87	2
VIGO	131	10





3. SESIONES CONSELLO GALEGO DOS PROCURADORES

Durante el año 2024 se han celebrado las siguientes sesiones de Junta de Gobierno del Consello Galego de Procuradores:

- 1. Sesión el 21 de febrero
- 2. Sesión el 29 de febrero
- 3. Sesión el 12 de marzo
- 4. Sesión el 4 de septiembre
- 5. Sesión el 30 de octubre
- 6. Sesión del 16 de diciembre



4. INFORME ANUAL DE GESTIÓN ECONÓMICA

Memoria económica abreviada del año 2024:
CONSELLO GALEGO DOS PROCURADORES

EJECUCIÓN DE GASTOS AÑO 2024

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	SALDO
41000005	MARKA INFORMATICA	2.952,40 €
41000006	PERCIBILLEIRA SL	6.352,50 €
41000011	SILVIA VILLAR BRUM	2.671,20 €
47510000	HACIENDA PUBLICA, ACREEDOR POR RETENCIONES	558,00 €
57200000	BANCO SANTANDER C/C 251271	34.341,35 €
	GASTOS	
60200002	GESTIÓN PÁGINA WEB CONSELLO GALEGO	1.292,28 €
60200013	GASTOS PLATAFORMA CONFERENCIAS VIOGEN	2.952,40 €
62300000	GASTOS GESTORIA	665,77 €
62300001	GASTOS ABOGADA MARTA ALVAREZ SANTULLANO	5.808,00 €
62300002	GASTOS SERVICIO DE MEDIACIÓN CONSELLO GALEGO	4.181,46 €
62300004	GASTOS EN ASESORÍA Y GESTIÓN DE LA COMUNICACIÓN	6.352,50 €
62300005	GASTOS CONTABLE CONSELLO GALEGO	820,00 €
62500000	GASTOS EN PRIMAS DE SEGUROS	648,85 €
62600000	GASTOS EN SERVICIOS BANCARIOS Y SIMILARES	185,67 €
62900001	GASTOS COMIDA BENIGNO LÓPEZ	80,00 €
62900002	GASTOS REPRESENTACIÓN PRESIDENTE	307,80 €
62900110	CONVENIO VIOGEN ICP. CORUÑA	3.000,00 €
62900111	CONVENIO VIOGEN ICP. LUGO	3.000,00 €
62900112	CONVENIO VIOGEN ICP. OURENSE	3.000,00 €
62900113	CONVENIO VIOGEN ICP. PONTEVEDRA	3.000,00 €
62900114	CONVENIO VIOGEN ICP. SANTIAGO	3.000,00 €
62900115	CONVENIO VIOGEN ICP. VIGO	3.000,00 €
62900200	ICP. CORUÑA COMPENSACIÓN GESTIÓN TURNOS	18.742,96 €
62900201	ICP. LUGO COMPENSACIÓN GESTIÓN TURNOS	8.169,49 €
62900202	ICP. OURENSE COMPENSACIÓN GESTIÓN TURNOS	9.878,21 €
62900203	ICP. PONTEVEDRA COMPENSACIÓN GESTIÓN TURNOS	13.952,70 €



62900204	ICP. SANTIAGO COMPENSACIÓN GESTIÓN TURNOS	9.837,19 €
62900205	ICP. VIGO COMPENSACIÓN GESTIÓN TURNOS	19.965,95 €
62900206	ICP. CORUÑA CONVENIO REPRESENTACIÓN GRATUITA	23.103,07 €
62900207	ICP. LUGO CONVENIO REPRESENTACIÓN GRATUITA	6.828,23 €
62900208	ICP. OURENSE CONVENIO REPRESENTACIÓN GRATUITA	8.132,71 €
62900209	ICP. PONTEVEDRA CONVENIO REPRESENTACIÓN GRATUITA	19.578,09 €
62900210	ICP. SANTIAGO CONVENIO REPRESENTACIÓN GRATUITA	8.417,05 €
62900211	ICP. VIGO CONVENIO REPRESENTACIÓN GRATUITA	9.137,46 €
62900213	ICP. LUGO DESPLAZAMIENTO	330,00 €
62900214	ICP. OURENSE DESPLAMIENTO	315,00 €
62900216	ICP. SANTIAGO DESPLAZAMIENTO	3.330,00 €
63100000	GASTOS IRPF NÓMINAS	690,24 €
64000002	GASTOS NÓMINA PERSONAL CONSELLO GALEGO	4.800,00 €
64200000	GASTOS SEGURIDAD SOCIAL	1.831,19 €
TOTAL GASTOS		208.334,27€

	INGRESOS	
76900000	ILMO. COLEGIO DE A CORUÑA	2.550,00 €
76900001	ILMO. COLEGIO DE LUGO	2.550,00 €
76900002	ILMO. COLEGIO DE OURENSE	2.550,00 €
76900003	ILMO. COLEGIO DE PONTEVEDRA	2.550,00 €
76900004	ILMO. COLEGIO DE SANTIAGO	2.550,00 €
76900005	ILMO. COLEGIO DE VIGO	2.550,00 €
76900006	INGRESO COMPENSACIÓN GESTIÓN TURNOS OFICIO	80.546,50 €
76900007	INGRESO CONVENIO MEDIACIÓN CIVIL Y MERCANTIL	2.832,14 €
76900009	INGRESO REPRESENTACIÓN GRATUITA	75.000,00 €
76900010	INGRESOS COSTA PROCESALES	605,00 €
76900100	INGRESO CONVENIO FORMACIÓN VIOGEN	39.918,68 €
TOTAL INGRESOS		214.202,32€

Saldo positivo a 31 de diciembre de 2024	5.868,05 €
--	------------



PRESUPUESTO AÑO 2024 · CONSELLO GALEGO DOS PROCURADORES

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	AÑO 2024
612000001	MATERIAL OFICINA	500,00 €
62100000	GASTOS ALOJAMIENTO Y GESTIÓN PÁGINA WEB	1.300,00 €
623000000	GESTORIA	1.000,00 €
623000001	ASESORIA	5.808,00 €
623000002	SERVICIO DE MEDIACION CONSELLO GALEGO	700,00 €
623000004	GASTOS ASESORÍA GESTIÓN Y COMUNICACIÓN	3.072,00 €
625000001	RESPONSABILIDAD CIVIL	700,00 €
626000000	SERVICIOS BANCARIOS Y SIMILARES	400,00 €
629000001	GASTOS CONTABLE CONSELLO GALEGO	820,00 €
631000000	GASTOS IRPF NÓMINA	800,00 €
640000001	GASTOS NÓMINA PERSONAL CONSELLO	3.600,00 €
642000000	SEGURIDAD SOCIAL	1.700,00 €
TOTAL GASTOS		20.400 €

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	AÑO 2024
769000002	ILMO. COLEGIO DE A CORUÑA	3.400,00 €
769000003	ILMO. COLEGIO DE LUGO	3.400,00 €
769000004	ILMO. COLEGIO DE OURENSE	3.400,00 €
769000005	ILMO. COLEGIO DE PONTEVEDRA	3.400,00 €
769000006	ILMO. COLEGIO DE SANTIAGO	3.400,00 €
769000007	ILMO. COLEGIO DE VIGO	3.400,00 €
TOTAL INGRESOS		20.400€



01- ACTIVIDAD DEL CONSELLO GALEGO DE PROCURADORES

EL CONSELLO GALEGO DE PROCURADORES a que se refiere la presente memoria tiene su domicilio social y fiscal en Rúa Viena s/n 15707 en Santiago de Compostela.

ACTIVIDAD

El CONSELLO GALEGO DE PROCURADORES tiene como actividad principal: ASOCIACION PROFESIONAL DE COLEGIOS DE PROCURADORES DE GALICIA y LA FORMACION CONTINUA DE LOS PROCURADORES GALLEGOS.

02- BASES DE PRESENTACIÓN DE LAS CUENTAS ANUALES

Imagen fiel

Las cuentas anuales se han preparado a partir de los registros contables, habiéndose aplicado las disposiciones legales vigentes en materia contable con el objeto de mostrar la imagen fiel del patrimonio, de la situación financiera y de los resultados del Consello Galego de Procuradores.

Principios contables

No ha sido necesario, ni se ha creído conveniente por parte de la administración del Consello Galego de Procuradores, la aplicación de principios contables facultativos distintos de los obligatorios a que se refiere el art. 38



del código de comercio y la parte primera del plan general de contabilidad.

Aspectos críticos de la valoración y estimación de la incertidumbre

En la elaboración de las cuentas anuales correspondientes al ejercicio 2024 se han determinado estimaciones e hipótesis en función de la mejor información disponible a 31/12/2024 sobre los hechos analizados. Es posible que acontecimientos que puedan tener lugar en el futuro obliguen a modificarlas (al alza o a la baja) en próximos ejercicios lo que se haría de forma prospectiva, reconociendo los efectos del cambio de estimación en las correspondientes cuentas anuales futuras.

Comparación de la información

No existe ninguna causa que impida la comparación de los estados financieros del ejercicio actual con los del ejercicio anterior.

Elementos recogidos en varias partidas

No existen elementos patrimoniales del Activo o del Pasivo que figuren en más de una partida del Balance.

Cambios en criterios contables

En el presente ejercicio, no se han realizado otros cambios en criterios contables de los marcados por la adaptación de la contabilidad al nuevo Plan



General Contable.

Corrección de errores

No se han detectado errores existentes al cierre del ejercicio que obliguen a reformular las cuentas, los hechos conocidos con posterioridad al cierre, que podrían aconsejar ajustes en las estimaciones en el cierre del ejercicio, han sido comentados en sus apartados correspondientes.

03- INMOVILIZADO MATERIAL, INTANGIBLE E INVERSIONES INMOBILIARIAS

El Consello Galego de Procuradores no dispone de inmovilizados intangibles con vida útil indefinida.

El Consello Galego de Procuradores no dispone de inversiones inmobiliarias.

04- TESORERÍA Y PRÉSTAMOS

El Consello Galego de Procuradores no tiene pasivo bancario.

No existe líneas de descuento ni pólizas de crédito al cierre del ejercicio.

Préstamos pendientes de pago al cierre del ejercicio:

No existen impagos sobre los préstamos pendientes de pago ni en el ejercicio actual ni en el anterior.

05- FONDOS PROPIOS

No existe ninguna circunstancia que limite la disponibilidad de las reservas.



06- EXISTENCIAS

No existen compromisos de compra y venta ni contratos de futuro significativos relativo a existencias.

No existen limitaciones a la disponibilidad de las existencias.

No existen existencias que figuren en el activo por una cantidad fija.

07- MONEDA EXTRANJERA

En este ejercicio no se han realizado transacciones en moneda extranjera.

08- SITUACIÓN FISCAL

Debido al hecho de que determinadas operaciones tienen diferente consideración al efecto de la tributación del impuesto sobre sociedades y la elaboración de estas cuentas anuales, la base imponible del ejercicio no difiere del resultado contable.

No existen provisiones derivadas del impuesto sobre beneficios ni acontecimientos posteriores al cierre que supongan una modificación de la normativa fiscal que afecte a los activos y pasivos fiscales registrados.

09- INFORMACIÓN SOBRE MEDIO AMBIENTE

Los abajo firmantes, como miembros del órgano de gobierno del Consello Galego de Procuradores, manifiestan que en la contabilidad correspondiente a las presentes cuentas anuales **NO** existe ninguna partida de naturaleza medioambiental que deba ser incluida en la Memoria de acuerdo a



las indicaciones de la tercera parte del Plan General de Contabilidad (Real Decreto 1515/2007, de 16 de Noviembre).

10- TRANSACCIONES CON PAGOS BASADOS EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO

Durante el ejercicio 2024 no se han realizado este tipo de operaciones.

11- COMBINACIONES DE NEGOCIOS

Ningún activo no corriente del Consello Galego de Procuradores se ha clasificado como mantenido para la venta.

Durante el ejercicio 2024, no ha habido operaciones que se puedan clasificar como interrumpidas.

12- ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA Y OPERACIONES INTERRUPTIDAS

Ningún activo no corriente del Consello Galego de Procuradores se ha clasificado como mantenido para la venta.

Durante el ejercicio 2024, no ha habido operaciones que se puedan clasificar como interrumpidas.

13- HECHOS POSTERIORES AL CIERRE

En el periodo que transcurre desde el cierre del ejercicio a la elaboración de las cuentas anuales no han acaecido hechos que afecten a la aplicación del principio de empresa en funcionamiento y a las citadas cuentas. Tampoco han acaecido hechos que, sin afectar a las cuentas anuales, su



conocimiento pudiera ser útil para los usuarios de los estados financieros.



5. ACTIVIDAD INSTITUCIONAL Y FORMATIVA

La Memoria del año 2024, viene marcada, aparte de la actividad y funciones habituales del Consello Galego dos Procuradores, en adelante CGP, por los siguientes hechos relevantes:

- Se recibe petición del Colegio de Procuradores de Lugo para nombramiento por el Consello de Junta Provisional. Así en sesión de 21 de febrero, atendiendo a la normativa aplicable se nombra Junta Provisional, entre los colegiados ejercientes con mayor antigüedad, los cuales dentro de los 30 días siguientes tendrán que convocar elecciones.
- En sesión celebrada el 12 de marzo se aprueba la subida de cuotas de los Colegios al Consello, hasta alcanzar los 850 euros trimestrales.
- En la misma sesión y recibidas peticiones para que el Consello se pronuncie sobre la pasarela al RETA se acuerda "El Consello manifiesta su apoyo a que se estudie la posibilidad o se analice la posibilidad de la pasarela al RETA para todos los Mutualistas en igualdad de condiciones, con la participación de la Mutualidad".
- Se comunica en Marzo la nueva composición de la Junta de Gobierno del Colegio de Coruña y la del Colegio de Lugo se hace en el mes de mayo.



- También se suscribe por el Consello Acuerdo sobre la addenda y prórroga del Convenio de colaboración entre la Atriga y el Consello Galego dos Procuradores para la aplicación de las nuevas tecnologías de la información en los procedimientos de gestión tributaria.
- Durante este año se aprueban y publican los nuevos Aranceles de Derechos de los profesionales de la procura, por Real Decreto 434/2024 de 30 de abril.
- Se firman convenios de Mediación y Violencia de Género, así como el derivado de aquellos asuntos de asistencia jurídica gratuita que no tienen SOX y no se pueden justificar.
- Se elabora el INFORME DE XUSTIZA EN GALICIA





ANEXO

Módulos e bases da compensación económica

Baremos para el cuarto trimestre del año 2022 y el primer, segundo y tercer trimestres de 2024.

Xurisdicción penal.

Código	Denominación	Módulo
101	Procedemento ante o xulgado de instrución en sumarios ou causas ante o tribunal do xurado	44,47 €
102	Intervención ante o xulgado de instrución en procedementos abreviados de especial complexidade (actuacións de máis de 1000 folios) e en procedementos abreviados de violencia de xénero	75,89 €
103	Intervención ante o xulgado de instrución en procedementos abreviados	32,00 €
104	Intervención ante o xulgado de instrución en xuízos rápidos	33,90 €
105	Xuízo oral ante a audiencia provincial	34,50 €
106	Xuízo oral ante o xulgado do penal	33,22 €
107	Procedemento sobre delitos leves ^(*)	33,57 €
108	Recurso de apelación	36,61 €
109	Procedemento ante o xulgado de vixilancia penitenciaria ^(*)	30,51 €

Xurisdicción civil.

Código	Denominación	Módulo
201	Procedemento ordinario	50,85 €
202	Xuízo verbal e procesos especiais en que resulte preceptiva a intervención de procurador	40,68 €
203	Proceso de familia contencioso (completo)	55,94 €
204	Proceso de familia de mutuo acordo	40,68 €
205	Medidas provisionais previas e coetáneas en procesos de familia	33,36 €
206	Modificación de medidas definitivas en procesos de familia	52,89 €
208	Execución de títulos xudiciais con oposición ou posteriores a dous anos	36,60 €
209	Recurso de apelación con tramitación ante a instancia	21,26 €
210	Recurso de apelación con tramitación ante a audiencia	15,26 €
211	Execución de títulos non xudiciais	38,53 €
212	Xurisdicción voluntaria cando a súa intervención resulte preceptiva	35,60 €



Xurisdicción contencioso-administrativa.

Código	Denominación	Módulo
301	Recurso contencioso-administrativo ^(*)	40,68 €
302	Recurso de apelación ^(*)	36,61 €

Xurisdicción social.

Código	Denominación	Módulo
401	Proceso da xurisdicción social ^(*)	40,68 €
402	Recurso de suplicación ^(*)	36,61 €

Xurisdicción militar.

Código	Denominación	Módulo
501	Proceso íntegro	40,68 €

Recursos de casación e outros extraordinarios.

Código	Denominación	Módulo
606	Recurso de casación e outros extraordinarios ante tribunais de Galicia	40,68 €

Normas xerais.

Código	Denominación	Módulo
701	Execución de sentenza posterior aos dous anos de se ditar a resolución xudicial, agás a xurisdicción civil	25,43 €
702	Medidas cautelares e dilixencias preliminares cando a súa intervención resulte preceptiva	20,34 €
703	Reconvención	30,00 €

^(*) Cando a intervención do procurador sexa requirida expresamente pola autoridade xudicial de conformidade co artigo 6.3 da Lei 1/1996, de asistencia xurídica gratuita.

Compensación aos colexios de procuradores por designacións excepcionais:

Naqueles supostos en que non sexa posible a atención ordinaria da representación gratuita por procuradores con despacho no propio partido xudicial, compensarase anualmente o colexio respectivo, a través do Consello Galego de Procuradores, coa cantidade de 15 €



por expediente –ata un máximo de 4.000 € anuais para todos os colexios–, polo desprazamento que supón a designación de procuradores doutro partido xudicial para garantir a prestación continuada do servizo.

ANEXO

Módulos e bases da indemnización pola prestación do servizo

Baremos para o cuarto trimestre do ano 2022 e o primeiro, segundo e terceiro trimestres de 2023.

Procuradores/tipoloxía

Xurisdición penal:

Código	Denominación	Módulo
101	Procedemento ante o xulgado de instrución en sumarios ou causas perante o tribunal do xurado	44,12 €
102	Intervención ante o xulgado de instrución en procedementos abreviados de especial complexidade (actuacións de máis de 1000 folios) e en procedementos abreviados de violencia de xénero	66,81 €
103	Intervención ante o xulgado de instrución en procedementos abreviados	29,67 €
104	Intervención ante o xulgado de instrución en xuízos rápidos	33,22 €
105	Xuízo oral ante a audiencia provincial	32,69 €
106	Xuízo oral ante o xulgado do penal	31,66 €

Código	Denominación	Módulo
107	Procedemento sobre delitos leves (*)	33,16 €
108	Recurso de apelación	36,61 €
109	Procedemento ante o xulgado de vixilancia penitenciaria (*)	30,51 €



Xurisdición civil:

Código	Denominación	Módulo
201	Procedemento ordinario	50,85 €
202	Xuízo verbal e procesos especiais en que resulte preceptiva a intervención de procurador	40,68 €
203	Proceso de familia contencioso (completo)	55,94 €
204	Proceso de familia de mutuo acordo	40,68 €
205	Medidas provisionais previas e coetáneas en procesos de familia	30,76 €
206	Modificación de medidas definitivas en procesos de familia	52,89 €
208	Execución de títulos xudiciais con oposición ou posteriores a dous anos	36,60 €
209	Recurso de apelación tramitación ante a instancia	21,36 €
210	Recurso de apelación tramitación ante a audiencia	15,26 €
211	Execución de títulos non xudiciais	38,15 €
212	Xurisdición voluntaria cando a súa intervención resulte preceptiva	35,60 €

Xurisdición contencioso-administrativa:

Código	Denominación	Módulo
301	Recurso contencioso-administrativo (*)	40,68 €
302	Recurso de apelación (*)	36,61 €

Xurisdición social:

Código	Denominación	Módulo
401	Proceso da xurisdición social (*)	40,68 €
402	Recurso de suplicación (*)	36,61 €

Xurisdición militar:

Código	Denominación	Módulo
501	Proceso íntegro	40,68 €

Recursos de casación e outros extraordinarios:

Código	Denominación	Módulo
606	Recurso de casación e outros extraordinarios ante tribunais de Galicia	40,68 €



Normas xerais:

Código	Denominación	Módulo
701	Execución de sentenza posterior aos dous anos de recaída a resolución xudicial, agás a xurisdición civil	25,43 €
702	Medidas cautelares e dilixencias preliminares cando a súa intervención resulte preceptiva	20,34 €
703	Reconvención	30,00 €

(*) Cando a intervención do procurador sexa requirida expresamente pola autoridade xudicial de conformidade co artigo 6.3 da Lei 1/1996, de asistencia xurídica gratuita.

Compensación aos colexios de procuradores por designacións excepcionais:

Naqueles supostos en que non sexa posible a atención ordinaria da representación gratuita por procuradores con despacho no propio partido xudicial, compensarase anualmente o colexio respectivo, a través do Consello Galego de Procuradores, coa cantidade de 15,00 € por expediente –ata un máximo de 4.000,00 € anuais para todos os colexios–, polo desprazamento que supón a designación de procuradores doutro partido xudicial para garantir a prestación continuada do servizo.



La actividad institucional y formativa del CGP durante el año 2024 ha sido la siguiente:



CONVENIO ENTRE A CONSELLERÍA DE PRESIDENCIA, XUSTIZA E DEPORTES E O CONSELLO GALEGO DOS PROCURADORES PARA COMPENSAR OS/AS PROFESIONAIS DA PROCURADORÍA DESIGNADOS/AS EN VIRTUDE DE REQUIRIMENTO XUDICIAL CANDO NON EXISTA UN RECOÑECIMENTO EXPRESO DO DEREITO DE ASISTENCIA XURÍDICA GRATUÍTA

Santiago de Compostela, na data da sinatura dixital

REUNIDOS:

D. **Diego Calvo Pouso**, conselleiro de Presidencia, Xustiza e Deportes, actuando en nome e representación da Xunta de Galicia, en virtude do Decreto 44/2024, do 14 de abril, que recolle o seu nomeamento, e no exercicio das facultades que lle confire o artigo 34 da Lei 1/1983, do 22 de febreiro, reguladora da Xunta e da súa Presidencia.

E D. **José Antonio Fandiño Carnero**, presidente do Consello Galego dos Procuradores dos Tribunais, actuando no seu nome e representación, de acordo co artigo 2 dos estatutos do Consello Galego dos Procuradores dos Tribunais, aprobados polo Decreto 56/2023, do 25 de maio, polo que se aproban os estatutos do Consello Galego dos Procuradores.

As partes, no nome e representación en que concorren, e coa capacidade legal para este acto,

EXPOÑEN:

PRIMEIRO. O artigo 24 da nosa Constitución garántelles o dereito fundamental a obteren a tutela efectiva dos xuíces e tribunais a todas as persoas no exercicio dos seus dereitos e intereses lexítimos, sen que, en ningún caso, poida producirse indefensión.

SEGUNDO. O Estatuto de autonomía de Galicia, aprobado pola Lei orgánica 1/1981, do 6 de abril, establece no seu artigo 20.1 que, en relación coa Administración de Xustiza, exceptuada a militar, corresponde á Comunidade Autónoma exercer todas as facultades que a Lei orgánica do poder xudicial lle recoñeza ou atribúa ao Goberno do Estado, que non entren no núcleo da Administración de Xustiza en sentido estrito. No eido de aplicación da dita cláusula subrogatoria do Estatuto de autonomía atópase a orixe do traspaso á Comunidade Autónoma de Galicia das funcións que desempeñaba a Administración do Estado en materia de provisión de medios materiais e económicos para o funcionamento da Administración de Xustiza. Este traspaso levouno a cabo o Real decreto 2166/1994, do 4 de novembro; e logo foi ampliado polo Real decreto 233/1998, do 16 de febreiro, para comprender tamén os medios materiais e económicos das fiscalías de





Galicia. Entre as funcións traspasadas polo Real decreto 2166/1994, do 4 de novembro, e asumidas polo Decreto 394/1994, do 29 de decembro, inclúense, entre outras, o aboamento da compensación económica aos colexios de avogados e de procuradores dos tribunais polas actuacións dos seus colexiados e colexiadas no ámbito da asistencia xurídica gratuíta.

TERCEIRO. O Consello Galego dos Procuradores dos Tribunais é unha corporación de dereito público integrada polos colexios de procuradores da Coruña, Lugo, Ourense, Pontevedra, Santiago de Compostela e Vigo (Decreto 248/2000, do 29 de setembro, polo que se crea o Consello Galego dos Procuradores dos Tribunais e se aproban os seus estatutos), e ten as mesmas competencias ca o Consello Xeral de Procuradores de España no ámbito territorial de Galicia. O Consello ten, entre outras funcións, a de fomentar, crear e organizar institucións, servizos e actividades en relación coa profesión de procurador, e a de colaborar cos poderes públicos na realización e pleno desenvolvemento dos dereitos da persoa e das institucións dentro do seu propio territorio.

CUARTO. As administracións públicas poden formalizar convenios de colaboración con outras entidades públicas e mais con persoas xurídicas suxeitas ao dereito privado, ao abeiro do disposto no artigo 48 da Lei 40/2015, do 1 de outubro, de réxime xurídico do sector público, e mais no Acordo do Consello da Xunta, do 27 de marzo de 1991, sobre convenios de cooperación con outros entes públicos e de colaboración con particulares, feito público por Resolución da Consellería de Economía e Facenda do 8 de abril de 1991.

QUINTO. A quenda de oficio é un servizo cuxa finalidade é garantir o dereito constitucional fundamental á tutela xudicial efectiva, e a asistencia xurídica e a representación gratuítas son unha parte importante da mesma, mais non a totalidade. Por isto, a Consellería de Presidencia, Xustiza e Deportes é consciente da necesidade de dar cobertura económica aos dereitos deixados de percibir por aqueles e aquelas profesionais designados/as de oficio que prestaran o servizo de representación en virtude de requirimento xudicial, de acordo co artigo 21 da Lei 1/1996, do 10 de xaneiro, de asistencia xurídica gratuíta, por unha banda, cando non exista un recoñecemento expreso do dereito de asistencia xurídica gratuíta ao ser denegado o beneficio por mor de faltar a sinatura da persoa interesada na correspondente solicitude que autorice o acceso á información económica por parte da Administración ou por insuficiencia na documentación requirida e, non obstante, consten evidencias obxectivas da insuficiencia de recursos da persoa asistida; e, por outra banda, para compensar o servizo de representación procesual prestado a través da quenda de oficio a persoas xurídicas que carezan de patrimonio suficiente, cando resulten investigadas no curso dun procedemento penal.

SEXTO. En base no exposto anteriormente, e coa finalidade de garantir o dereito de acceso á Xustiza e á representación procesual e mais a satisfacción dos dereitos



OME-HGSEF-eedSVN7
Verificación: <https://sede.xunta.gal/ove>



económicos dos e das profesionais que a prestan a través da quenda de oficio, resulta conveniente articular mediante un convenio a necesaria asistencia e o apoio económico, con cargo ao orzamento de gastos da Consellería de Presidencia, Xustiza e Deportes, para lograr a maior eficacia posible na asignación de recursos económicos asociados a esa finalidade.

En consecuencia con todo o anteriormente exposto, as partes coidan conveniente desenvolver unha colaboración en común, para o cal acordan subscribir o presente convenio de colaboración, que se rexerá polas seguintes

CLÁUSULAS:

Primeira. Obxecto do convenio.

O obxecto do presente convenio é establecer as condicións polas que se rexerá a colaboración entre a Consellería de Presidencia, Xustiza e Deportes e o Consello Galego dos Procuradores para dar cobertura económica a aquelas actuacións dos e das profesionais realizadas en procedementos penais nos que se produce a designación de procurador/a en virtude de requirimento xudicial, de acordo co artigo 21 da Lei 1/1996, do 10 de xaneiro, de asistencia xurídica gratuíta, para a representación de persoas físicas ou xurídicas, nos cales non se produza a concesión da xustiza gratuíta no prazo dun ano desde a designación, ben por non se tramitar, ben porque a persoa beneficiaria da mesma non achegou a documentación requirida.

Para estes efectos, o Consello Galego dos Procuradores acreditará a designación xudicial, a intervención do/da procurador/a designado/a no procedemento e mais a insuficiencia de medios da persoa beneficiaria que lle permitiría o acceso ao dereito segundo a Lei 1/1996, de 10 de xaneiro, de asistencia xurídica gratuíta. Esta última circunstancia xustificárase mediante certificación do correspondente colexio de procuradores de que non constan nos autos ingresos ou bens das persoas beneficiarias.

Mediante o presente convenio, a Consellería de Presidencia, Xustiza e Deportes prestaralle ao Consello Galego dos Procuradores os medios adecuados para que se poidan desenvolver, nas situacións referidas nos parágrafos anteriores, as actuacións profesionais dos/das procuradores/as co rigor e garantía que exige a Constitución española.

Segunda. Compensación económica para os procuradores.

A Consellería de Presidencia, Xustiza e Deportes compensará economicamente os/as profesionais da procuradoría designados/as de oficio que presten a representación procesual nos supostos previstos na cláusula anterior segundo as contías seguintes:



OME-HGSEF-eedSVN7
Verificación: <https://sede.xunta.gal/ove>



A.- Persoas físicas no proceso penal: segundo as contías establecidas nos baremos de compensación económica previstos para as actuacións dos/das procuradores/as no ámbito da asistencia xurídica gratuíta.

B.- Representación de persoas xurídicas investigadas no curso dun procedemento penal: 26,17 €.

Terceira. Orzamento.

O financiamento máximo para as actuacións descritas no convenio é de SETENTA E CINCO MIL EUROS (75.000,00 €). A mencionada cantidade imputarase aos orzamentos de gastos da Consellería de Presidencia, Xustiza e Deportes para 2024 na aplicación orzamentaria 35.03.131A.481.2.

Poderanse realizar pagamentos parciais trimestrais á conta da liquidación definitiva, na medida en que o Consello xustifique debidamente as actuacións realizadas, ata acadar como máximo o 80% do importe do convenio. O 20% restante farase efectivo unha vez presentada pola entidade a documentación final xustificativa.

Para estes efectos, xunto coa documentación que o Consello Galego dos Procuradores achegue para as xustificacións trimestrais ou final da execución do convenio, presentará tamén un informe detallado onde se certifiquen todas as designacións realizadas, especificando o órgano xudicial, o procedemento, o nome do/da procurador/a, o colexio a que pertence e mais o número de colexiado/a, así como a actuación desenvolvida e a contía correspondente.

A subvención supón o 100% do custo total estimado.

Dado que o crédito orzamentario desta subvención corresponde ao capítulo IV do orzamento de gastos da Consellería de Presidencia, Xustiza e Deportes e que o Consello Galego dos Procuradores é unha institución xurídico-administrativa sen ánimo de lucro, a citada institución queda exonerada da constitución de garantía, de acordo co establecido no artigo 65.4, apartado f) do Decreto 11/2009, do 8 de xaneiro, polo que se aproba o Regulamento da Lei 9/2007, do 13 de xuño, de subvencións de Galicia.

Cuarta. Obrigas do Consello Galego dos Procuradores.

O Consello Galego dos Procuradores comprométese a:

1. Achegarlles aos/ás procuradores/as designados/as mediante resolución xudicial, tal e como se recolle na cláusula primeira, as compensacións económicas



ONE-HG5Z7eeSVN7
Verificación: <https://sede.xunta.gal/one>



transferidas pola Consellería de Presidencia, Xustiza e Deportes, para garantir o acceso á Xustiza e á representación procesual.

2. Remitir á Dirección Xeral de Xustiza, dentro do mes natural seguinte ao da finalización de cada trimestre, unha certificación que conteña os datos relativos ás actuacións realizadas polos/polas profesionais durante ese período que se atopen nas situacións previstas no obxecto do presente convenio.

3. Consentir expresamente a inclusión dos datos relevantes deste convenio nos rexistros públicos que proceda, de conformidade coa disposición adicional do Decreto 132/2006, do 27 de xullo, polo que se regulan os rexistros públicos creados nos artigos 44 e 45 da Lei 7/2005, do 29 de decembro, dos orzamentos xerais da Comunidade Autónoma de Galicia para o ano 2006.

4. Prestar colaboración á Intervención Xeral da Comunidade Autónoma, ao Tribunal de Contas e mais ao Consello de Contas, e facilitarlles canta documentación lle requiran no exercicio das funcións de fiscalización e control que lles corresponden.

A xustificación comprenderá os gastos de accións intentadas cobrar polo profesional do representado ou realizadas co resto de requisitos exixidos no presente convenio e pagadas dende o 1 de xaneiro ata o 1 de decembro de 2024, e deberá presentarse na Dirección Xeral de Xustiza con data límite o 10 de decembro de 2024.

Quinta. Control.

O Consello Galego dos Procuradores someterase ás actuacións de comprobación que a Consellería de Presidencia, Xustiza e Deportes lle poida requirir para a debida xustificación dos fins deste convenio, así como tamén ás de control financeiro que lle corresponden á Intervención Xeral da Comunidade Autónoma en relación coa achega económica realizada.

A Consellería de Presidencia, Xustiza e Deportes poderá solicitar en calquera momento os documentos que coide oportunos para a debida xustificación.

Se o/a profesional que prestou o servizo obxecto deste convenio cobrou os seus dereitos con posterioridade á compensación económica librada pola Consellería de Presidencia, Xustiza e Deportes, procederá a lle reintegrar as cantidades percibidas ao Consello Galego dos Procuradores. O importe destes reintegros percibidos polo Consello serán obxecto de compensación na xustificación, parcial ou final, seguinte.



ONE-HG5Z7eeSVN7
Verificación: <https://sede.xunta.gal/one>



Sexta. Confidencialidade da información e dos resultados.

O Consello Galego dos Procuradores comprométese a garantir a total confidencialidade dos datos persoais e familiares a que teña acceso como consecuencia das actividades realizadas. Igualmente, comprométese a observar o establecido na Lei 39/2015, do 1 de outubro, do procedemento administrativo común das administracións públicas, no que se refire ao acceso limitado ás propias persoas interesadas en relación cos documentos que conteñan datos referentes á intimidade das persoas.

Este convenio será obxecto de publicación, de acordo co previsto na Lei 1/2016, do 18 de xaneiro, de transparencia e bo goberno da Administración pública galega. Así mesmo, incluírase no Rexistro Público de Axudas, Subvencións e Convenios, de conformidade co Decreto 132/2006, do 27 de xullo, polo que se regulan os rexistros públicos creados nos artigos 44 e 45 da Lei 7/2005, do 29 de decembro, de orzamentos xerais da Comunidade Autónoma de Galicia para o ano 2006.

As partes asinantes do convenio manifestan o seu consentimento para que os datos persoais que constan neste convenio, así como o resto das especificacións contidas nel, poidan ser publicados no Portal de transparencia e Goberno aberto.

As partes asinantes quedarán obrigadas en materia de protección de datos a cumprir co Regulamento (UE) 2016/679 do Parlamento Europeo e do Consello, do 27 de abril de 2016, relativo á protección das persoas físicas no que respecta ao tratamento de datos persoais e á libre circulación destes datos e polo que se derroga a Directiva 95/46/CE (Regulamento xeral de protección de datos), así como coa Lei orgánica 3/2018, do 5 de decembro, de protección de datos persoais e garantía dos dereitos dixitais, e coas demais disposicións vixentes sobre a materia.

Sétima. Comisión de Seguimento do convenio.

Segundo o previsto na Lei 40/2015, do 1 de outubro, de réxime xurídico do sector público, créase a Comisión de Seguimento do convenio, á cal corresponde velar polo cumprimento do pactado e pola boa marcha deste.

Este órgano estará integrado polos seguintes membros:

- Dúas persoas representantes da Consellería de Presidencia, Xustiza e Deportes.
- Dúas persoas representantes do Consello Galego dos Procuradores.

A Comisión terá as seguintes funcións:



- Facer o seguimento e control do desenvolvemento do convenio.
- Estudar as posibles modificacións do convenio propostas polas partes, as cales se formalizarán a través das correspondentes addendas.
- Propoñer a interpretación e resolución das dúbidas que se poidan suscitar na aplicación do convenio.

Actuará como secretario ou secretaria, con voz pero sen voto, a persoa que exerza a xefatura do Servizo de Asistencia Xurídica Gratuíta da Dirección Xeral de Xustiza.

A Comisión reunirase logo do pedimento de calquera das partes.

Oitava. Publicidade

En cumprimento do disposto nos artigos 18 e 20.8 da Lei 38/2003, do 17 de novembro, xeral de subvencións, comunicárase a subscrición deste convenio á Base de Datos Nacional de Subvencións, que opera como sistema nacional de publicidade de subvencións.

Novena. Vixencia do convenio.

O presente convenio producirá efectos a partir da súa sinatura, ata o cumprimento polas partes dos deberes asumidos. En ningún caso excederá o 30 de decembro de 2024.

Décima. Natureza xurídica e cuestións litixiosas.

O presente convenio ten natureza administrativa e rexeráse polas cláusulas establecidas nel, quedando fóra do ámbito de aplicación da Lei 9/2017, do 8 de novembro, de contratos do sector público, con independencia de que, ao abeiro do previsto no artigo 4 da devandita norma, lle sexan de aplicación os principios desta lei para resolver as dúbidas e lagoas que se puidesen presentar.

Resulta de aplicación a normativa reguladora das subvencións públicas, isto é, a Lei 9/2007, do 13 de xuño, de subvencións de Galicia, o Decreto 11/2009, do 8 de xaneiro, polo que se aproba o regulamento da devandita Lei, así como as previsións de carácter básico da Lei 38/2003, do 17 de novembro, xeral de subvencións, e o Real Decreto 887/2006, do 21 de xullo, polo que se aproba o regulamento da Lei 38/2003, do 17 de novembro, xeral de subvencións.

A Administración gozará de todas as prerrogativas inherentes á natureza administrativa do convenio.





A orde xurisdiccional contencioso-administrativa será a competente para resolver as cuestións litixiosas que se poidan suscitar entre as partes, conforme o establecido nos artigos 1 e 2 da Lei 29/1998, do 13 de xullo, reguladora da xurisdición contencioso-administrativa.

Décimo primeira. Modificacións e resolución do convenio.

Conforme o disposto no artigo 17.4 da Lei 9/2007 toda alteración das condicións tidas en conta para a concesión da subvención, poderá dar lugar á modificación do convenio, sendo de aplicación das previsións ao respecto contidas na Lei 9/2007, do 13 de xuño, e no regulamento da dita lei.

Así mesmo, o presente convenio poderá ser modificado por mutuo acordo das partes a través da subscripción da correspondente addenda modificativa, que deberá ser subscrita polas mesmas autoridades que asinan este, se as partes consideran necesaria introducir modificacións no convenio, motivadas pola necesidade de dotar unha maior achega económica ao mesmo, e, en todo caso, se as dispoñibilidades orzamentarias da Consellería de Presidencia, Xustiza e Deportes así o permiten.

O presente convenio resolverase:

- a) Por incumprimento inxustificado, total ou parcial, dos compromisos establecidos.
- b) Por mutuo acordo, que deberá ser motivado e manifestado por escrito antes da finalización do Convenio
- c) Pola desaparición das causas que motivaron a sinatura do Convenio ou polo transcurso do tempo fixado sen que se execute o investimento obxecto da subvención

De se resolver o convenio, a Consellería de Presidencia, Xustiza e Deportes poderá, se é o caso, esixir o reintegro das cantidades achegadas. Igualmente, de conformidade co disposto no artigo 17.3 da Lei 9/2007, do 13 de xuño, procederá o reintegro do exceso percibido no suposto de que o importe da axuda -illada ou en concorrencia con subvencións e axudas, ingresos ou recursos- supere o custo da actividade subvencionada.

Décimo segunda. Obriga de cumprimento dos compromisos.

En caso de finalización do presente convenio, calquera que sexa a causa, as partes comprométense a concluír as obrigas e compromisos pendentes asumidos con anterioridade á data da súa finalización.
E en proba de conformidade con canto antecede, e para a debida constancia, asinan o presente convenio de colaboración, por duplicado exemplar, na data consignada na sinatura electrónica.



POLA CONSELLERÍA DE PRESIDENCIA,
XUSTIZA E DEPORTES

POLO CONSELLO GALEGO DOS
PROCURADORES

Diego Calvo Pouso

José Antonio Fandiño Carnero

Asinado por: CALVO POUSO, DIEGO
Cargo: Conselleiro
Data e hora: 17/09/2024 15:09:55

Asinado por: FANDIÑO CARNERO, JOSÉ ANTONIO
Cargo: Presidente (Consello Galego dos Procuradores)
Data e hora: 17/09/2024 15:01:35





CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE A CONSELLERÍA DE PRESIDENCIA, XUSTIZA E DEPORTES E O CONSELLO GALEGO DOS PROCURADORES, PARA A COLABORACIÓN EN MATERIA DE MEDIACIÓN NO ÁMBITO CIVIL E MERCANTIL NO ANO 2024.

Santiago de Compostela, na data da sinatura dixital

REÚNENSE:

D. **Diego Calvo Pouso**, conselleiro de Presidencia, Xustiza e Deportes, actuando en nome e representación da Xunta de Galicia, en virtude do Decreto 44/2024, do 14 de abril, polo que se nomean os titulares das consellerías da Xunta de Galicia, no exercicio das facultades que lle confire o artigo 34 da Lei 1/1983, do 22 de febreiro, reguladora da Xunta e da súa presidencia.

E D. **José Antonio Fandiño Carnero**, presidente do Consello Galego dos Procuradores dos Tribunais, actuando no seu nome e representación, de acordo co artigo 2 dos estatutos do Consello Galego dos Procuradores dos Tribunais, aprobados polo Decreto 56/2023, do 25 de maio, polo que se aproban os estatutos do Consello Galego dos Procuradores.

Interveñen en función dos seus respectivos cargos e no exercicio das facultades que para convir en nome das entidades que representan teñen conferidas.

EXPOÑEN:

Primeiro. A Lei 5/2012, do 6 de xullo (BOE do 7 de xullo), regula a mediación en asuntos civís e mercantís incorporando ao Dereito español a Directiva 2008/52/CE (DOUE do 24 de maio de 2008), que aprobou para o ámbito europeo o establecemento da mediación como medida para a resolución de asuntos civís e mercantís, de entre outros incluídos na denominada "ADR" (*Alternative Dispute Resolution*). Así mesmo o Real decreto 980/2013, do 13 de decembro, desenvolve determinados aspectos da Lei 5/2012, do 6 de xullo, de mediación en asuntos civís e mercantís.

Unha das funcións esenciais do Estado de dereito é a garantía da tutela xudicial dos dereitos dos cidadáns. Esta función implica o reto da implantación dunha Xustiza de calidade capaz de resolver os diversos conflitos que xorden nunha sociedade moderna e, á vez, complexa.



Neste contexto, dende a década dos anos setenta do pasado século veuse recorrendo a novos sistemas alternativos de resolución de conflitos, entre os que destaca a mediación, que foi cobrando unha importancia crecente como instrumento complementario da Administración de xustiza.

O obxectivo de asegurar un mellor acceso á Xustiza como parte da política da Unión Europea encamiñada a establecer un espazo de liberdade, seguridade e xustiza debe abranguer o acceso a métodos tanto xudiciais coma extraxudiciais de resolución de litixios.

Neste ámbito , con data 4 de outubro de 2021 asinouse un Convenio cuxa finalidade é establecer o marco de colaboración a desenvolver entre o Consello Xeral do Poder Xudicial e a Consellería de Presidencia, Xustiza e Deportes da Xunta de Galicia para o impulso, promoción e divulgación da mediación e outras formas pacíficas de resolución de conflitos como fórmula alternativa e complementaria ao proceso xudicial

Segundo. Entre as vantaxes da mediación cómpre destacar a súa capacidade para dar solucións prácticas, efectivas e rendibles a determinados conflitos entre partes, o que a configura como unha alternativa ao proceso xudicial ou á vía arbitral, dos que se debe deslindar con claridade. A mediación está construída arredor da intervención dun profesional neutral que facilita a resolución do conflito polas propias partes dunha forma equitativa, permitindo o mantemento das relacións subxacentes e conservando o control sobre o final do conflito.

A mediación pode proporcionar unha solución extraxudicial económica e rápida a conflitos en asuntos civís e mercantís, mediante procedementos adaptados ás necesidades das partes. É máis probable que os acordos resultantes da mediación se cumpran voluntariamente, e tamén que se manteña unha relación amigable e viable entre as partes. Estes beneficios son aínda máis perceptibles en asuntos que teñan carácter transfronteirizo.

Terceiro. O Consello Galego de Procuradores é unha corporación de dereito público integrada polos colexios de procuradores da Coruña, Lugo, Ourense, Pontevedra, Santiago de Compostela e Vigo (Decreto 248/2000, do 29 de setembro, polo que se aproba a creación do Consello Galego de Procuradores, DOG do 19 de outubro). Correspóndelle ao seu presidente, entre outras funcións, exercer a representación do Consello, estando asignado o exercicio de cantos dereitos e funcións lle atribúan o seu estatuto e as relacións cos poderes públicos, entidades, corporacións e persoas xurídicas ou naturais de calquera orde, sempre que se trate de materias de carácter xeral para a profesión, dentro do ámbito do Consello e sexan da competencia dos organismos autonómicos.





A Lei 5/2012, do 6 de xullo, de mediación de asuntos civís e mercantís, no seu artigo 5.1 dispón que poderán ser institucións de mediación as entidades públicas ou privadas, españolas ou estranxeiras, e as corporacións de dereito público que teñan entre os seus fins o impulso da mediación. Ao abeiro da devandita norma, tendo en conta que o Consello Galego ten natureza dunha corporación de dereito público, e conscientes da importancia e transcendencia da mediación como medio extraxudicial de resolución de conflitos, está no ánimo dos seus conselleiros constituír o Consello Galego de Procuradores dos Tribunais en institución mediadora, e para tal fin na sesión de data do 10 de xaneiro do 2014 aprobouse a modificación do apartado cuarto do artigo 5 do Decreto 248/2000 para incluír entre as súas finalidades e funcións a arbitrase e o fomento da mediación.

Cuarto. O Estatuto de autonomía de Galicia, aprobado pola Lei orgánica 1/1981, do 6 de abril, establece no seu artigo 20.1 que en relación coa Administración de xustiza, exceptuada a militar, lle corresponde á Comunidade exercer todas as facultades que as leis orgánicas do poder xudicial e do Consello Xeral do Poder Xudicial recoñezan ou atribúan ao Goberno do Estado.

Quinto. O Consello Galego dos Procuradores é consciente da importancia do fomento da mediación como método de resolución de conflitos, e como corporación de dereito público que ten entre as súas finalidades e fins o impulso da mediación, iniciou unha serie de actuacións co obxectivo de promover a cultura da mediación, de conformidade coas liñas de actuación marcadas polo Consello Xeral de Procuradores de España nesta materia, que xiran sobre dous piares básicos: o primeiro deles é a formación do colectivo de procuradores galegos, polo que a través da Escola de Formación Continua para Procuradores, que se encadra dentro do convenio marco subscrito entre as tres universidades galegas e o Consello, se garante tanto a formación inicial coma a formación permanente dos profesionais; o segundo é a creación do servizo de mediación do Consello Galego dos Procuradores dos Tribunais, a través do cal se asumirán as funcións de mediación previstas na lei.

Sexto. O modelo de mediación baséase na voluntariedade e libre decisión das partes e na intervención dun mediador, do que se pretende unha intervención activa orientada á solución da controversia polas propias partes. O réxime baséase na flexibilidade e no respecto á autonomía da vontade das partes, favorecendo esta alternativa fronte á solución xudicial do conflito. É aquí onde se encontra, precisamente, un dos eixes da mediación, que é a deslegalización ou perda do papel central da lei en beneficio dun principio dispositivo que rexe tamén nas relacións que son obxecto do conflito.

A figura do mediador é a peza esencial do modelo, posto que é quen axuda a atopar unha solución dialogada e voluntariamente querida polas partes.



Tense presente o papel, moi relevante neste contexto, dos servizos e institucións de mediación, que desempeñan unha tarefa fundamental á hora de ordenar e fomentar os procedementos de mediación.

Por todo o exposto, as partes acordan asinar o presente convenio de colaboración con base nas seguintes

CLÁUSULAS:

Primeira. Obxecto.

O obxecto do presente convenio é establecer un marco estable e permanente de colaboración entre a Consellería de Presidencia, Xustiza e Deportes e o Consello Galego dos Procuradores, co fin de potenciar e consolidar a mediación como modalidade alternativa de solución de conflitos no ámbito empresarial cuxa xurisdición corresponda aos xulgados do mercantil e civil no ámbito da Comunidade galega.

Para estes efectos, enténdese por mediación aquel medio de solución de controversias, calquera que sexa a súa denominación, no cal dúas ou máis partes intentan voluntariamente alcanzar por si mesmas un acordo coa intervención dun mediador.

O mediador, de acordo coa súa conformación natural, é quen axuda a encontrar unha solución dialogada e voluntariamente querida polas partes, e non pode ter funcións decisorias, pero si de xestión do procedemento.

Segunda. Obrigas do beneficiario.

O Consello Galego dos Procuradores comprométese a:

1. Realizar as actividades previstas no proxecto que se recolle neste convenio. A dotación de persoal dedicada a estes fins estará sometida ás directrices e ordes do Consello Galego dos Procuradores dos Tribunais, e o dito persoal non terá relación laboral coa Consellería de Presidencia, Xustiza e Deportes.
2. Destinar os fondos percibidos ao financiamento dos gastos necesarios para levar a cabo as actuacións referidas na cláusula primeira.
3. Poñer á disposición da autoridade xudicial, cando así sexa solicitado por esta, información relativa aos posibles destinatarios do uso.
4. Achegar á Administración autonómica, cando lle sexa solicitada, información sobre as actividades realizadas.
5. Consentir expresamente a inclusión dos datos relevantes deste convenio nos rexistros públicos que proceda, de conformidade coa disposición adicional do Decreto 132/2006, do 27 de xullo, polo que se regulan os rexistros públicos creados nos artigos 44 e 45 da Lei 7/2005, do 29 de decembro, dos orzamentos





xerais da Comunidade Autónoma de Galicia para o ano 2006, e mais co artigo 16 da Lei 9/2007, do 13 de xuño, de subvencións de Galicia.

6. Dar axeitada publicidade ao carácter público do financiamento das actuacións obxecto do presente convenio, cumprir todas as condicións e obrigas recollidas nel e someterse ás actuacións de supervisión e control previstas no mesmo, así como observar as demais obrigas esixidas no artigo 11 da Lei 9/2007, do 13 de xuño.

7. Prestar a colaboración e facilitar canta documentación lle sexa requirida no exercicio das funcións de control que lle corresponden á Intervención Xeral da Comunidade Autónoma e ao Consello de Contas.

Terceira. Actuacións ou compromisos das partes.

A. Do Consello Galego dos Procuradores :

1. Servizo de mediación do Consello Galego dos Procuradores

A mediación que realizará o Consello Galego de Procuradores comprenderá os servizos de mediación intraxudicial e extraxudicial, en materia civil e mercantil.

- O servizo de mediación intraxudicial entenderá daqueles asuntos que se encontren inmersos na vía xurisdiccional, ofrecendo unha alternativa a esta para as partes.
- O servizo de mediación extraxudicial entenderá de todos os demais asuntos que non se encontren no apartado anterior.

O servizo de mediación do Consello Galego dos Procuradores ofrecerá o persoal cualificado para a prestación do servizo de mediación intraxudicial e extraxudicial.

O servizo de mediación intraxudicial será gratuíto para os usuarios. O servizo de mediación intraxudicial requirirá a anuencia da Administración de Xustiza, que prestará o seu consentimento a través da/s autoridade/s competente/s.

Os mediadores do servizo de mediación do Consello Galego de Procuradores que presten seus servizos poderán obter unha certificación oficial da súa participación en cada asunto que lles reportará o prestixio de ser colaboradores cos Tribunais de Xustiza.

O servizo de mediación extraxudicial será gratuíto para aqueles usuarios que nun procedemento xudicial estarian en condicións de ser beneficiarios de asistencia xurídica gratuíta. Para os usuarios non comprendidos no apartado anterior estableceranse de común acordo as tarifas do prezo do servizo. O servizo de mediación extraxudicial non terá custo ningún para a Administración, sen prexuízo dos futuros convenios que poidan chegar a subscribirse ou de que a mediación sexa incluída entre as prestacións



CVE: L1WU-LjKt00b1
Verificación: <https://seede.xunta.gal/cve>



do artigo 6 da Lei 1/1996, do 10 de xaneiro, de asistencia xurídica gratuíta. O mediador recibirá a retribución que corresponda con cargo ás tarifas establecidas.

A prestación do servizo público de mediación é compatible coa actividade privada do servizo de mediación do Consello Galego dos Procuradores.

O servizo de mediación do Consello Galego dos Procuradores realizará un seguimento dos asuntos que tivesen entrada. Neste sentido, e especialmente:

- Para unha mellora da calidade do servizo, os usuarios avaliarano a través dun cuestionario no cal se incluírán indicadores que axuden a valorar os diversos aspectos do servizo.
- Os mediadores confeccionarán as estatísticas das mediacións co fin de obter datos e porcentaxes sobre os resultados obtidos nos procedementos derivados ou extraxudiciais, facendo constar indicadores das materias, se se produciu ou non aceptación da mediación, se houbo ou non acordo en mediación ou posteriormente, se se abandonou ou non a mediación, etc.
- Os mediadores remitirán semestralmente ao Consello Xeral do Poder Xudicial as fichas de control estatístico das operacións de mediación realizadas.

2. Formación

O Consello Galego dos Procuradores organizará cursos formativos para os efectos de acreditar a formación específica que permita exercer a mediación no ámbito de aplicación deste protocolo, dirixidos a aqueles colexiados que non achegasen a documentación acreditativa da dita formación no momento de entrar a formar parte do servizo de mediación como mediadores, en virtude do disposto no artigo 11.2 da Lei 5/2012, do 6 de xullo, de mediación en asuntos civís e mercantís, e, se for caso, do establecido no seu desenvolvemento regulamentario.

Estes cursos proporcionaranlles aos mediadores os necesarios coñecementos xurídicos, psicolóxicos, de técnicas de comunicación, de resolución de conflitos, de negociación e de ética da mediación, tanto a nivel teórico coma práctico.

Os mediadores axustarán a súa actuación ao disposto na Lei 5/2012, do 6 de xullo, de mediación en asuntos civís e mercantís, así como ao establecido no Real decreto 980/2013, do 13 de decembro, polo que se desenvolven determinados aspectos da lei, adheriranse ao Código de conduta europea e subscribirán o compromiso de confidencialidade e mais o seguro de responsabilidade civil.



CVE: L1WU-LjKt00b1
Verificación: <https://seede.xunta.gal/cve>



B. Da Consellería de Presidencia, Xustiza e Deportes:

A Consellería de Presidencia, Xustiza e Deportes comprométese a lle aboar ao Consello Galego dos Procuradores dos Tribunais os gastos que deriven da execución deste programa de mediación no ámbito civil e mercantil, coas seguintes tarifas:

- Aboarase ata 30,00 € cada hora de servizo da persoa mediadora, ata un máximo de 180,00 € por mediación que se teña concluída. No caso de que unha mediación se limite só á primeira sesión informativa, por ter sido rexeitada polas partes, ou por outra causa, abonaráselle á persoa mediadora interveniente ata un máximo de 45,00 €. A estas cantidades engadiráselle o IVE que sexa de aplicación en cada caso.
- Para estes efectos, xunto coa documentación que o Consello Galego dos Procuradores dos Tribunais acheguen para a xustificación da execución do convenio, presentarán tamén un informe detallado onde se recollan todas as mediacións realizadas, especificando o órgano xudicial, o procedemento, o nome do mediador ou mediadores que interviñeron na mediación, os beneficiarios e o número de horas de traballo que se xustifican (ata un máximo de seis horas por mediación).
- O Consello Galego dos Procuradores dos Tribunais poderá xustificar como gastos xerais para a execución do convenio (gastos de divulgación, material funxible e consumibles, equipamento para o equipo de mediadores e outros gastos de análoga natureza), con cargo á execución do convenio, ata un máximo do 10% do xustificado de acordo cos apartados anteriores, coas limitacións máximas de gastos establecidas no convenio.

O investimento máximo a que se refire o presente convenio fíxase en **QUINCE MIL EUROS (15.000,00 €)**, con cargo á aplicación orzamentaria 35.03.131A.481.0 dos orzamentos xerais da Comunidade Autónoma para o ano 2024, para o aboamento ao Consello Galego dos Procuradores pola realización das actividades obxecto do convenio.

A Consellería de Presidencia, Xustiza e Deportes fará o pagamento ao Consello Galego dos Procuradores unha vez que presenten a seguinte documentación xustificativa:

- Certificación da Intervención ou do órgano que teña atribuídas as facultades de control da toma de razón en contabilidade e mais do cumprimento da finalidade para a que foi concedida a subvención, de acordo co establecido no artigo 28.5 da Lei 9/2007, do 13 de xuño, de subvencións de Galicia.
- Declaración do conxunto de axudas solicitadas –tanto das aprobadas ou concedidas coma das pendentes de resolución– para o mesmo proxecto ás administracións públicas competentes ou ás súas entidades vinculadas ou dependentes, así como aos entes privados.



OVE: L1wV-LjKb0b1
Verificación: https://seede.xunta.gal/ove



- Declaración responsable de se achar ao corrente no cumprimento das obrigas tributarias e fronte á Seguridade Social, así como de non ter ningunha outra débeda coa Administración pública da Comunidade Autónoma.
- Calquera outra documentación ou material que o Consello Galego dos Procuradores dos Tribunais consideren necesario presentar para unha mellor xustificación das actuacións obxecto do presente convenio.

O prazo límite para presentar a devandita documentación xustificativa fíxase no 10 de decembro de 2024.

A subvención supón o 100% do custo total estimado.

Dado que o crédito orzamentario desta subvención corresponde ao capítulo IV do orzamento de gastos da Consellería de Presidencia, Xustiza e Deportes e que o Consello Galego dos Procuradores é unha institución xurídico-administrativa sen ánimo de lucro, a citada institución queda exonerada da constitución de garantía, de acordo co establecido no artigo 65.4, apartado f) do Decreto 11/2009, do 8 de xaneiro, polo que se aproba o Regulamento da Lei 9/2007, do 13 de xuño, de subvencións de Galicia.

Procederá o reintegro parcial ou total dos fondos percibidos no suposto de incumprimento das condicións establecidas para a súa concesión nos termos previstos no título II da Lei 9/2007, do 13 de xuño, de subvencións de Galicia.

Así mesmo, ao abeiro do disposto no artigo 14.1.n) da Lei 9/2007, do 13 de xuño, de subvencións de Galicia, os criterios de gradación dos posibles incumprimentos para determinar a cantidade a minorar serán os seguintes:

- a) O incumprimento total dos fins para os que se concedeu a axuda, da realización dos gastos subvencionables ou da obriga de xustificación dará lugar á perda do dereito ao cobro ou, de ser o caso, ao reintegro da totalidade da axuda concedida.
- b) Calquera outro incumprimento parcial dos fins para os que se concedeu a axuda, da realización parcial do investimento subvencionable ou da obriga de xustificación considerarase incumprimento parcial e dará lugar á perda do dereito ao cobro ou, de ser o caso, á perda do dereito ao cobro na porcentaxe correspondente ao investimento non efectuado ou non xustificado.
- c) A realización de modificacións non autorizadas no orzamento subvencionable suporá a perda do dereito ao cobro.

Cuarta. Asuntos susceptibles de remitir cara á mediación.

Os asuntos susceptibles de ser derivados á mediación a que se refire este convenio serán todos aqueles da xurisdición mercantil e civil no ámbito da Comunidade galega.



OVE: L1wV-LjKb0b1
Verificación: https://seede.xunta.gal/ove



As partes asinantes e as que no futuro se poidan adherir a este convenio impulsarán a mediación civil e mercantil, e ofrecerán o dito instrumento de solución alternativa de conflitos ás partes en litixio nos procedementos sometidos ao coñecemento dos xulgados de Galicia con competencia en materia civil e mercantil de conformidade co regulado na Lei Orgánica do Poder Xudicial.

Co obxecto de conseguir a maior eficacia, establécese unha duración non superior a un mes para o proceso de mediación, que se computará dende a celebración da primeira xuntanza cos mediadores unha vez aceptada a mediación, sen prexuízo da posibilidade de prórroga tras pedimento dos mediadores, e de forma xustificada, por un mes máis. Excepcionalmente poderase establecer unha prórroga por un prazo superior cando se xustifique debidamente, e sen que en ningún caso se superen os tres meses de duración.

Quinta. Principios esenciais do proceso de mediación.

Son principios básicos da mediación os seguintes:

1. **Voluntariedade.** Respetarase en todo caso o principio de voluntariedade na aceptación do proceso de mediación.
2. **Confidencialidade.** A información que se utilice no procedemento de mediación permanecerá reservada, e unicamente se informará sobre a consecución ou non dun acordo. No caso de que a mediación non continúe por desistir algunha das partes, unicamente se informará ao xuíz deste feito, que carecerá de toda incidencia no axuizamento posterior. En todo caso o mediador está obrigado a informar ao xuíz e máis ao Ministerio Fiscal de calquera feito delituoso.
3. **Igualdade das partes.** Garantirase a plena igualdade e liberdade das partes, interrompéndose a mediación cando se advirta a existencia de calquera outra causa que rompa este principio.
4. **Homologación de acordos.** O acordo total ou parcial acadado, se for o caso, no proceso de mediación seralle comunicado ao xulgado polo mediador, que lles entregará ás partes o acordo de mediación (total ou parcial) e acreditará este punto ao xulgado para efectos de constancia e respectando o principio de confidencialidade, retomándose o proceso cos efectos que correspondan para efectos da súa homologación.
5. E os demais establecidos no título II da Lei 5/2012, do 6 de xullo, de mediación en asuntos civís e mercantís.



CVE: LjWvLjKb0b1
Verificación: <https://sede.xunta.gal/cve>



Sexta. Incompatibilidades.

Serán motivos de incompatibilidade que obrigarán a renunciar á realización da mediación, alén dos legalmente previstos, os seguintes:

- a) Ter vínculo de parentesco por consanguinidade ou afinidade ata o cuarto grao con algunha das partes intervinientes na mediación, ou cos seus asesores, representantes legais ou mandatarios, así como compartir o despacho profesional ou estar asociado con estes para o asesoramento, a representación ou o mandato.
- b) Ter intervido profesionalmente con anterioridade no asunto obxecto de mediación.
- c) Ter interese directo, de calquera tipo, no asunto obxecto da súa actuación, ou unha manifesta vinculación –directa ou indirecta– económica, laboral ou doutro tipo que poida comprometer a súa independencia profesional.
- d) Calquera outro suposto establecido legal ou regulamentariamente.

Sétima. Compromisos dos mediadores.

En calquera caso cumprírase, en canto aos requisitos que terá que observar o mediador, o disposto no Real decreto 980/2013, do 13 de decembro, polo que de desenvolven determinados aspectos da Lei 5/2012, do 6 de xullo, de mediación en asuntos civís e mercantís.

Así mesmo, o mediador comprométese a:

- a) Realizar os cursos e seminarios de formación que para este efecto sexan convocados polo Consello Galego dos Procuradores dos Tribunais.
- b) Aceptar as encargas de mediación entre as partes nun proceso, non sendo que incorran nalgún dos supostos de incompatibilidade recollidos
- c) Cumprir os prazos establecidos no convenio en relación coa duración máxima do procedemento de mediación.
- d) Respetar as disposicións existentes en materia de incompatibilidade.
- e) Garantir a debida confidencialidade e segredo na súa actuación como mediador.
- f) Enviar ao Consello Xeral do Poder Xudicial, con carácter semestral, a ficha de recollida de datos solicitada por este.

Oitava. Baixa do mediador.

Serán causas de baixa do mediador, ademais da voluntaria, as seguintes:

- a) A perda da condición de colexiado.
- b) O incumprimento das condicións ou compromisos do convenio.



- c) A incoación de procedemento penal ou expediente disciplinario.
- d) A actuación a sabendas da existencia de incompatibilidade.
- e) O rexeitamento inxustificado da realización das tarefas encomendadas.

Novena. Gastos subvencionables.

Con carácter xeral, e de acordo co establecido no artigo 29 da Lei 9/2007, do 13 de xuño, xeral de subvencións de Galicia, consideraranse gastos subvencionables aqueles que de xeito indubidable respondan á natureza da actividade subvencionada e se realicen dentro do período comprendido entre o 1 de xaneiro de 2024 e a data límite de xustificación do convenio. En ningún caso o custo de adquisición dos gastos subvencionables poderá ser superior ao valor de mercado.

Os custos indirectos –tales como axudas de custo, viaxes ou consumibles– formarán parte da xustificación da subvención, sempre que sexan imputados polo Consello Galego dos Procuradores dos Tribunais á actividade subvencionada e en todo caso na medida en que tales custos correspondan ao período en que efectivamente se realiza a actividade, e con data de xustificación comprendida entre o 1 de xaneiro de 2024 e a data límite de xustificación.

Décima. Control.

O Consello Galego dos Procuradores someterase ás actuacións de comprobación que a Consellería de Presidencia, Xustiza e Deportes lle poida requirir para a debida xustificación dos fins deste convenio, así como tamén ás de control financeiro que lle corresponden á Intervención Xeral da Comunidade Autónoma en relación cos pagamentos realizados.

A Consellería de Presidencia, Xustiza e Deportes poderá solicitar en calquera momento os documentos que coide oportunos para a debida xustificación do gasto.

En todo caso, e unicamente para efectos estatísticos, o Consello Galego dos Procuradores informará trimestralmente á Consellería de Presidencia, Xustiza e Deportes sobre os procedementos de mediación realizados polos mediadores, comunicando o número de mediacións realizadas, o xulgado de procedencia e a duración de cada unha delas, así como o resultado final dos procedementos.

O Consello Galego dos Procuradores remitiralle á Consellería de Presidencia, Xustiza e Deportes unha memoria anual na que se recollan e describan todas as actuacións levadas a cabo polo mediador.

O Consello Galego dos Procuradores comprométese a prestar a colaboración e facilitar canta documentación lle sexa requirida no exercicio das funcións de control que lle



corresponden á Intervención Xeral da Comunidade Autónoma ao Consello de Contas e ao Tribunal de Contas.

Décimo primeira. Publicidade e protección de datos.

Este convenio será obxecto de publicación, de acordo co previsto na Lei 1/2016, do 18 de xaneiro, de transparencia e bo goberno da Administración pública galega. Así mesmo, incluírase no Rexistro Público de Axudas, Subvencións e Convenios, de conformidade co Decreto 132/2006, do 27 de xullo, polo que se regulan os rexistros públicos creados nos artigos 44 e 45 da Lei 7/2005, do 29 de decembro, de orzamentos xerais da Comunidade Autónoma de Galicia para o ano 2006, e mais co artigo 16 da Lei 9/2007, do 13 de xuño, de subvencións de Galicia.

En cumprimento do disposto nos artigos 18 e 20.8 da Lei 38/2003, do 17 de novembro, xeral de subvencións, comunicárase a subscrición deste convenio á Base de Datos Nacional de Subvencións, que opera como sistema nacional de publicidade de subvencións.

As partes asinantes do convenio manifestan o seu consentimento para que os datos persoais que constan neste convenio, así como o resto das especificacións contidas no mesmo, poidan ser publicados no Portal de transparencia e Goberno aberto.

As partes asinantes virán obrigadas en materia de protección de datos a cumprir coa Lei Orgánica 3/2018, do 5 de decembro, de protección de datos persoais e garantías dos dereitos dixitais, co Regulamento (UE) 2016/679 do Parlamento Europeo e do Consello, de 27 de abril de 2016, relativo á protección das persoas físicas no que respecta ao tratamento de datos persoais e á libre circulación destes datos e polo que se deroga a Directiva 95/46/CE (Regulamento xeral de protección de datos) e demais disposicións vixentes sobre a materia.

O Consello Galego dos Procuradores en calidade de encargado do tratamento, realizará actividades de tratamento por conta da Consellería de Presidencia, Xustiza e Deportes en calidade de responsable do tratamento, respecto aos datos de carácter persoal necesarios para a execución do presente convenio.

Así mesmo adaptarán as súas actuacións ao previsto na Lei Orgánica 3/2018, de 5 de decembro, de Protección de datos persoais e garantía dos dereitos dixitais, así como nas demais disposicións vixentes sobre a materia.

O tratamento de datos consistirá nas actividades necesarias para xestionar o presente convenio.





Igualmente comprométense a destacar nas actividades que se realicen para a difusión das accións previstas no Convenio, a colaboración prestada polas outras partes asinantes.

Décimo segunda. Confidencialidade da información e dos resultados.

As partes asinantes do presente Convenio comprométense a observar o establecido na Lei 39/2015, do 1 de outubro, do procedemento administrativo común das administración públicas, no que se refire ao acceso limitado aos propios interesados en relación cos documentos que conteñan datos referentes á intimidade das persoas.

Décimo terceira. Comisión mixta de coordinación e seguimento.

Segundo o previsto na Lei 40/2015, do 1 de outubro, de réxime xurídico do sector público, créase a comisión de seguimento do convenio, á que lle corresponde velar polo cumprimento do pactado e pola boa marcha do mesmo.

As controversias sobre a interpretación e execución do presente convenio serán resoltas de mutuo acordo entre as partes no seo da comisión.

A Comisión terá as seguintes funcións:

- Facer o seguimento e control do desenvolvemento do convenio.
- Estudar as posibles modificacións do convenio propostas polas partes, as cales se formalizarán a través das correspondentes addendas.
- Propoñer a interpretación e resolución das dúbidas que se poidan suscitar na aplicación do convenio.

Este órgano estará integrado polos seguintes membros:

- O titular da Dirección Xeral de Xustiza da Consellería de Presidencia, Xustiza e Deportes, ou persoa en quen delegue.
- O Presidente do Consello Galego dos Procuradores, ou persoa en quen delegue.

Actuará como secretario, con voz pero sen voto, a persoa que exerza a xefatura do Servizo de Coordinación Técnico-Administrativa da Dirección Xeral de Xustiza.

A comisión reunirse de xeito ordinario cada tres meses co obxecto de garantir a calidade do servizo, corrixi- r disfuncionalidades e analizar a experiencia; e con carácter extraordinario cando sexa necesario, tras pedimento de calquera das partes. Para tales efectos a comisión poderá requirir a presenza do mediador.



Décimo cuarta. Vixencia do convenio.

A vixencia do presente convenio será a comprendida entre a súa sinatura e o 31 de decembro de 2024; non obstante, abranguerá as accións obxecto do convenio que se realicen dende o 1 de xaneiro de 2024.

Décimo quinta. Natureza xurídica e cuestións litixiosas.

O presente convenio ten natureza administrativa e rexerase polas cláusulas establecidas nel, quedando fóra do ámbito de aplicación da Lei 9/2017, do 8 de novembro, de Contratos do Sector Público, con independencia de que, ao abeiro do previsto no artigo 4 de dita norma, lle sexan de aplicación os principios desta lei para resolver as dúbidas e lagoas que se puidesen presentar.

Resulta de aplicación a normativa reguladora das subvencións públicas, isto é, a Lei 9/2007, do 13 de xuño, de subvencións de Galicia, o Decreto 11/2009, do 8 de xaneiro, polo que se aproba o regulamento da devandita Lei, así como as previsións de carácter básico da Lei 38/2003, do 17 de novembro, xeral de subvencións, e o Real Decreto 887/2006, do 21 de xullo, polo que se aproba o regulamento da Lei 38/2003, do 17 de novembro, xeral de subvencións.

A Administración gozará de todas as prerrogativas inherentes á natureza administrativa do convenio.

A orde xurisdiccional contencioso-administrativa será a competente para resolver as cuestións litixiosas que se poidan suscitar entre as partes, conforme o establecido nos artigos 1 e 2 da Lei 29/1998, do 13 de xullo, reguladora da xurisdicción contencioso-administrativa.

Décimo sexta. Modificacións e resolución do convenio.

Conforme o disposto no artigo 17.4 da Lei 9/2007 toda alteración das condicións tidas en conta para a concesión da subvención, poderá dar lugar á modificación do convenio, sendo de aplicación das previsións ao respecto contidas na Lei 9/2007, do 13 de xuño, e no regulamento da dita lei.

Así mesmo, o presente convenio poderá ser modificado por mutuo acordo das partes a través da subscrición da correspondente addenda modificativa, que deberá ser subscrita polas mesmas autoridades que asinan este, se as partes consideran necesaria introducir modificacións no convenio, motivadas pola necesidade de dotar unha maior aportación económica ao mesmo, e, en todo caso, se as dispoñibilidades orzamentarias da Consellería de Presidencia, Xustiza e Deportes así o permiten.





O presente convenio resolverase:

- a) Por incumprimento inxustificado, total ou parcial, dos compromisos establecidos.
- b) Por mutuo acordo, que deberá ser motivado e manifestado por escrito antes da finalización do Convenio
- c) Pola desaparición das causas que motivaron a sinatura do Convenio ou polo transcurso do tempo fixado sen que se execute o investimento obxecto da subvención

De se resolver o convenio, a Consellería de Presidencia, Xustiza e Deportes poderá, se é o caso, esixir o reintegro das cantidades achegadas. Igualmente, de conformidade co disposto no artigo 17.3 da Lei 9/2007, do 13 de xuño, procederá o reintegro do exceso percibido no suposto de que o importe da axuda -illada ou en concorrencia con subvencións e axudas, ingresos ou recursos- supere o custo da actividade subvencionada.

Décimo sétima. Obriga de cumprimento dos compromisos.

En caso de finalización do presente convenio, calquera que sexa a causa, as partes comprométese a concluír as obrigas e compromisos pendentes asumidos con anterioridade á data de finalización do mesmo.

E en proba de conformidade con canto antecede, e para a debida constancia, asínase o presente convenio de colaboración, no lugar e data arriba indicados.

POLA CONSELLERÍA DE PRESIDENCIA,
XUSTIZA E DEPORTES

POLO CONSELLO GALEGO DOS
PROCURADORES DOS TRIBUNAIS

Diego Calvo Pouso

José Antonio Fandiño Carnero



CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE A VICEPRESIDENCIA PRIMEIRA E CONSELLERÍA DE PRESIDENCIA, XUSTIZA E DEPORTES, A CONSELLERÍA DE PROMOCIÓN DO EMPREGO E IGUALDADE E O CONSELLO GALEGO DOS PROCURADORES DOS TRIBUNAIS, PARA O DESENVOLVEMENTO DE ACCIÓNS DE FORMACIÓN ESPECIALIZADA A COLEXIADOS E ATENCIÓN A MULLERES E MENORES QUE SOFREN VIOLENCIA DE XÉNERO NO MARCO DO PACTO DE ESTADO CONTRA A VIOLENCIA DE XÉNERO.

Santiago de Compostela, na data da sinatura dixital

REUNIDOS

D. **Diego Calvo Pouso**, vicepresidente primeiro e conselleiro de Presidencia, Xustiza e Deportes, actuando en nome e representación da Xunta de Galicia, en virtude do Decreto 65/2023, do 14 de xuño, polo que se procede ao seu nomeamento, no exercicio das facultades que lle confire o artigo 34 da Lei 1/1983, do 22 de febreiro, de normas reguladoras da Xunta e da súa presidencia.

Dña. **Elena Rivo López**, conselleira de Promoción do Emprego e Igualdade, actuando en nome e representación da Xunta de Galicia, en virtude do Decreto 68/2023, do 14 de xuño, polo que se nprocede ao seu nomeamento, no exercicio das facultades que lle confire o artigo 34 da Lei 1/1983, do 22 de febreiro, de normas reguladoras da Xunta e da súa Presidencia.

D. **José Antonio Fandiño Carnero**, presidente do Consello Galego dos Procuradores dos Tribunais, actuando no seu nome e representación, de acordo co artigo 2.1, dos estatutos do Consello Galego dos Procuradores dos Tribunais, aprobados polo Decreto 248/2000, do 29 de setembro, polo que se aproba a creación do Consello Galego de Procuradores.

EXPÖEN

PRIMEIRO.

Que a Comunidade Autónoma de Galicia ostenta competencias exclusivas en materia de asistencia social, de conformidade co disposto no artigo 27.23 do

Assinado por CALVO POUSO, DIEGO
Data e hora: 17/09/2024 15:09:55

Assinado por FANDIÑO CARNERO, JOSÉ ANTONIO
Data e hora: 17/09/2024 15:01:35

CVE: L1W1Lsk0b1
Verificación: https://sede.xunta.gal/ove





Estatuto de Autonomía de Galicia, Lei Orgánica 1/1981, do 6 de abril), e nos Reais Decretos de Transferencia 2411/1982, do 24 de xullo e 534/1984, do 25 de xaneiro.

SEGUNDO.

Que a Vicepresidencia Primeira e Consellería de Presidencia, Xustiza e Deportes é o órgano da Administración autonómica que ten atribuído, a través do Decreto 117/2022, do 23 de xuño, polo que se establece a súa estrutura orgánica, polo que se establece a súa estrutura orgánica, o exercicio das competencias en materia de xustiza, recollidas no artigo 20 do Estatuto de autonomía de Galicia, aprobado pola Lei orgánica 1/1981, do 6 de abril.

TERCEIRO.

Que a Xunta de Galicia, a través da Secretaría Xeral da Igualdade da Consellería de Promoción do Emprego e Igualdade, ten entre as súas competencias impulsar as actuacións conducentes á promoción da igualdade e á eliminación da discriminación entre mulleres e homes, así como á eliminación da violencia de xénero

CUARTO.

Que a Lei 11/2007, do 27 de xullo, galega para a prevención e o tratamento integral da violencia de xénero, modificada pola Lei 12/2016, do 22 de xullo, dispón a adopción en Galicia de medidas integrais para a sensibilización, a prevención e o tratamento da violencia de xénero, así como a protección e o apoio ás mulleres que a sofren.

No artigo 15 da dita Lei recóllese a necesidade de que a Xunta de Galicia garanta e promova a formación en igualdade de todas e todos os profesionais que traballan en ámbitos relacionados directa ou indirectamente coa violencia de xénero, e en especial das e dos profesionais da sanidade, dos servizos sociais, dos educativos, das Forzas e Corpos de Seguridade e das operadoras e dos operadores xurídicos.

QUINTO.

Que o 15 de novembro de 2016, o Pleno do Congreso dos Deputados aprobou, por unanimidade, unha Proposición non de lei pola que se instaba ao Goberno a promover a subscrición dun Pacto de Estado en materia de Violencia de Xénero, polo Goberno da Nación, as Comunidades Autónomas e Cidades con Estatuto de Autonomía e a Federación Española de Municipios e Provincias, que siga impulsando políticas para a erradicación da violencia sobre a muller como unha verdadeira política de Estado. A Proposición non de lei establecía a creación, no seo da Comisión de Igualdade do Congreso, dunha Subcomisión que tiña como obxectivo elaborar un informe no que se identificaran e analizaran os problemas que impiden



avanzar na erradicación das diferentes formas de violencia de xénero, e no que se incluíran un conxunto de propostas de actuación, entre elas as principais reformas que deben acometerse para dar cumprimento efectivo a ese fin, así como ás recomendacións dos organismos internacionais. O Congreso, na súa sesión plenaria do 28 de setembro de 2017, aprobou o Informe da Subcomisión para un Pacto de Estado en materia de violencia de xénero.

Pola súa parte, a Comisión de Igualdade do Senado decidiu, o 21 de decembro de 2016, a creación dunha Ponencia que estudase e avaliase, en materia de Violencia de xénero, os aspectos de prevención, protección e reparación das vítimas, analízase a estratexia para alcanzar e implementar un Pacto de Estado contra a Violencia de xénero e examínase a Lei Orgánica 1/2004, de 28 de decembro, de Medidas de Protección Integral contra a Violencia de Xénero.

O 13 de setembro de 2017, o Pleno do Senado aprobou, por unanimidade, o Informe da Ponencia de Estudo para a elaboración de estratexias contra a violencia de xénero.

Ambos informes conteñen un conxunto de propostas para previr e combater a violencia contra a muller e para mellorar na resposta que, desde as Institucións, se proporciona ás mulleres vítimas e ás súas fillas e fillos menores.

O día 25 de novembro de 2021, catro anos despois da aprobación do Pacto de Estado contra a Violencia de Xénero de 2017, a maioría dos grupos políticos con representación parlamentaria, conscientes de que o Pacto de Estado non pode ter como horizonte temporal o mes de setembro de 2022, senón que debe continuar vertebrando a nosa resposta como país fronte á violencia machista, asinaron un acordo de renovación do Ditame, onde novamente se plasmou a vontade de todos os actores institucionais de seguir traballando polo cumprimento das medidas do Pacto de Estado contra a Violencia de Xénero e o establecemento dun marco ampliado e permanente para o desenvolvemento de políticas públicas que o fortalezan.

En base a todo o anterior, o 22 de xullo de 2022 a Conferencia Sectorial de Igualdade aprobou o Acordo relativo ao establecemento dun marco de actuación conxunta que garanta a prorroga e permanencia das políticas públicas e os servizos que se derivan do Pacto de Estado contra a Violencia de Xénero, co obxecto de asegurar as condicións básicas que garantan a igualdade de todas as mulleres no exercicio dos seus dereitos fronte á violencia. Este acordo ten como finalidade consolidar o traballo fronte á violencia contra as mulleres no conxunto do Estado, avanzando na institucionalización e a permanencia dos compromisos adquiridos no marco do Pacto de Estado contra a Violencia de Xénero. A estes efectos, o acordo ten por obxecto impulsar o deseño de mecanismos de colaboración que garantan a estabilidade orzamentaria e administrativa de maneira que permitan soste os actuais e futuros servizos vinculados ao Pacto de Estado contra a Violencia de Xénero.

O 20 de marzo de 2023 publicouse no Boletín Oficial do Estado a Resolución do 16 de marzo de 2023, da Secretaría de Estado de Igualdade e contra a Violencia de Xénero,



pola que se publica o Acordo da Conferencia de Sectorial de Igualdade, de 3 de marzo de 2023, polo que se aproba o Plan conxunto plurianual en materia de violencia contra as mulleres (2023-2027).

SEXTO.

Que as medidas 115 e 231 dos Informes da Subcomisión para un Pacto de Estado en materia de violencia de xénero do Congreso e Senado respectivamente, establecen o reforzo da asistencia xurídica ás mulleres vítimas antes e durante todo o procedemento xudicial e incluso despois deste, durante a fase de execución de condena, incorporando un maior número de letrados e letradas ás quendas de oficio especializadas e mellorando a formación especializada dos mesmos.

E que dentro do Catálogo de referencia de políticas e servizos en materia de violencia contra as mulleres, incluído dentro Plan conxunto plurianual en materia de violencia contra as mulleres (2023-2027), na subárea 1.5., Formación e sensibilización a profesionais, recóllese a actuación 1.5.01: "Garantir a formación especializada, obrigatoria, inicial e continuada, dos equipos profesionais que estean en contacto directo ou indirecto coas vítimas e superviventes de todas as formas de violencia contra as mulleres", e entre os principais perfís de profesionais aos que se dirixe esta formación figuran os operadores xurídicos.

SÉTIMO.

Que a Vicepresidencia Primeira e Consellería de Presidencia, Xustiza e Deportes e a Consellería de Promoción do Emprego e Igualdade asinaron o 19 de maio de 2021 un acordo de colaboración para desenvolver medidas previstas no Pacto de Estado contra a violencia de xénero que se refiran a reforzar a asistencia xurídica ás mulleres vítimas de xénero, incluíndo ás vítimas de violencia sexual no acceso á asistencia xurídica gratuita, antes e durante o procedemento xudicial, así como a ampliar a formación especializada de avogados/as e procuradores/as.

OITAVO.

O Consello Galego dos Procuradores dos Tribunais é unha corporación de dereito público integrada polos colexios de procuradores da Coruña, Lugo, Ourense, Pontevedra, Santiago de Compostela, e Vigo (Decreto 248/2000, do 29 de setembro, polo que se crea o Consello Galego dos Procuradores dos Tribunais e se aproban os seus estatutos), e ten as mesmas competencias que o Consejo General de Procuradores de España no ámbito territorial de Galicia. O Consello exerce as funcións tradicionais de natureza administrativa, como a tramitación e resolución de recursos en materia deontolóxica e as relacións con outras institucións e administracións, e dedica importantes esforzos no ámbito da formación dos procuradores a das procuradoras de Galicia, mediante o establecemento de programas en diversas materias do exercicio profesional coma mediación, procedemento penal do menor, e deontoloxía profesional e violencia sobre a muller.



NOVENO.

Que a concesión directa da subvención a través deste convenio se efectuará ao abeiro dos artigos 19.4.c) e 26 da Lei 9/2007, do 13 de xuño, de subvencións de Galicia, e o artigo 40 do Decreto 11/2009, do 8 de xaneiro, polo que se aproba o regulamento da Lei 9/2007, do 13 de xuño, de subvencións de Galicia, na que se prevé a posibilidade de excepciónar do réxime ordinario de concorrência competitiva en base ao carácter singular das subvencións e razóns de interese público, cal é o caso no que o interese prioritario é poder ofertar a profesionais do ámbito xurídico unha formación especializada dirixida á prevención e á detección de casos de violencia de xénero

A Vicepresidencia Primeira e Consellería de Presidencia, Xustiza e Deportes e a Consellería de Promoción do Emprego e Igualdade estiman de interese público establecer una liña de traballo conxunto, e propónse a colaboración co Consello Galego dos Procuradores dos Tribunais para canalizar o dito interese.

Por todo o indicado, as dúas partes acordan formalizar o presente Convenio de Colaboración, que se rexerá conforme ao disposto nas seguintes:

CLÁUSULAS

PRIMEIRA.- Obxecto e finalidade.

O obxecto deste Convenio é establecer as condicións polas que se rexerá a colaboración entre a Vicepresidencia Primeira e Consellería de Presidencia, Xustiza e Deportes, a Consellería de Promoción do Emprego e Igualdade e o Consello Galego dos Procuradores para a posta en marcha, desenvolvemento e financiamento de accións de formación especializada dirixidas a profesionais da procuradoría e a atención a mulleres e menores que sofren violencia de xénero, trata ou explotación sexual no marco do Pacto de Estado contra a Violencia de Xénero.

As actividades que desenvolverá o Consello Galego dos Procuradores, en execución deste convenio, comprenderán actividades de formación dirixidas aos profesionais da procuradoría que inclúan módulos específicos sobre menores e violencia de xénero, mulleres estranxeiras e aspectos psicolóxicos e sociais (recursos e programas en Galicia), en relación coa violencia de xénero, trata ou explotación sexual. Tamén será obxecto deste convenio o establecemento por parte dos colexios de procuradores de Galicia dun servizo de representación procesual e un servizo de atención ao cidadán en materia procesual especialmente dirixido a estes colectivos.



O carácter singular do presente Convenio, ven determinado por razóns de interese público, e cómpre sinalar que na nosa Comunidade Autónoma, moitas mulleres son vítimas directas da violencia de xénero, nalgúns casos con resultado de morte, o que fai evidente o interese social e humanitario de calquera acción que se dirixa a previr e detectar estes casos e a apoiar ás súas vítimas, neste caso a través de accións de formación especializada a profesionais do ámbito xurídico e de atención procesual ás vítimas, e leva á Xunta de Galicia a establecer a presente colaboración.

SEGUNDA.- Capacidade

Previamente á formalización do presente convenio, o Consello Galego dos Procuradores dos Tribunais presentou ante a Vicepresidencia Primeira e Consellería de Presidencia, Xustiza e Deportes a declaración responsable de non estar incurso en ningunha das prohibicións para a obtención de subvencións contempladas no artigo 10 da Lei 9/2007, do 13 de xuño, xeral de subvencións e que poidan impedir a subscrición do presente convenio.

TERCEIRA.- Obrigas do beneficiario

O Consello Galego dos Procuradores comprométese a:

1. Realizar as actividades previstas no proxecto que se recolle neste convenio. A dotación de persoal dedicada a estes fins estará sometida ás directrices e ordes do Consello Galego dos Procuradores dos Tribunais, e o dito persoal non terá relación laboral coa Administración Autonómica de Galicia, de tal xeito que, por este concepto non se lle poderá esixir a esta administración ningunha responsabilidade directa nin subsidiaria.
2. Xustificar o cumprimento dos requisitos e das condicións, así como a realización da actividade e o cumprimento da finalidade do presente convenio.
3. Facilitar toda a información que lle sexa requirida pola Intervención Xeral da Comunidade Autónoma, polo Tribunal de Contas e polo Consello de Contas no exercicio das súas funcións de fiscalización e control do destino das subvencións.
4. Achegar á Administración autonómica, cando lle sexa solicitada, información sobre as actividades realizadas.
5. Consentir expresamente a inclusión dos datos relevantes deste convenio nos rexistros públicos que proceda, de conformidade coa disposición adicional do Decreto 132/2006, do 27 de xullo, polo que se regulan os rexistros públicos creados nos artigos 44 e 45 da Lei 7/2005, do 29 de decembro, dos orzamentos xerais da Comunidade Autónoma de Galicia para o ano 2006, e mais co artigo 16 da Lei 9/2007, do 13 de xuño, de subvencións de Galicia.

6



6. Dar axeitada publicidade ao carácter público do financiamento das actuacións obxecto do presente convenio, cumprir todas as condicións e obrigas recollidas nel e someterse ás actuacións de supervisión e control previstas no mesmo, así como observar as demais obrigas esixidas no artigo 11 da Lei 9/2007, do 13 de xuño.

CUARTA.-Compromisos das partes.

Compromisos da Vicepresidencia Primeira e Consellería de Presidencia, Xustiza e Deportes

A Vicepresidencia Primeira e Consellería de Presidencia, Xustiza e Deportes, colaborará na realización das actuacións a que se refire a cláusula primeira deste convenio achegando a cantidade máxima de CORENTA MIL EUROS (40.000,00 €), con cargo á aplicación orzamentaria 06.03.131A.481.0 (código de proxecto 2018 00112) dos orzamentos xerais da Comunidade Autónoma para o ano 2023, como contribución aos gastos soportados polo Consello Galego dos Procuradores pola realización das accións de formación especializada dirixidas a profesionais da procuradoría, sobre atención a mulleres e menores que sofren violencia de xénero.

Compromisos da Consellería de Promoción do Emprego e Igualdade:

A Consellería de Promoción do Emprego e Igualdade, a través da Secretaría xeral da Igualdade, comprométese a facilitar material informativo e de sensibilización a prol da detección e eliminación da violencia de xénero ao Consello Galego dos Procuradores para a súa distribución nas accións formativas e divulgativas, así como a poñer a disposición do Consello materiais formativos sobre violencia de xénero, de xeito que permita ás e a os profesionais ampliar os seus coñecementos ao respecto. Así mesmo, porá á súa disposición persoal técnico especializado para a coordinación conxunta de actuacións.

Compromisos do Consello Galego dos Procuradores:

O Consello Galego dos Procuradores comprométese a poñer en marcha e desenvolver accións de formación específica sobre atención a mulleres e menores que sofren violencia de xénero a través de cursos, seminarios, xornadas, conferencias, coloquios, etc., e ao establecemento dun servizo de representación procesual e de atención ao cidadán en materia procesual especialmente dirixido a estes colectivos.

QUINTA.- Orzamento

O investimento para o desenvolvemento do presente convenio é de 40.000,00 € para o ano 2023. No orzamento de 2023 da Dirección Xeral de Xustiza figura un remanente relativo a programas financiados con fondos do Pacto de Estado nos exercicios 2021 e 2022 para dotar a aplicación orzamentaria 06.03.131A.481.0 (código de proxecto 2018 00112) do orzamento de gastos da Dirección Xeral de Xustiza. A Vicepresidencia Primeira e Consellería de Presidencia, Xustiza e Deportes achegará

7



ao Consello Galego de Procuradores a cantidade máxima de 40.000,00 € (CORENTA MIL EUROS), librando esta cantidade con cargo á aplicación orzamentaria 06.03.131A.481.0 (código de proxecto 2018 00112), dos orzamentos xerais da Comunidade Autónoma galega para o ano 2023, derivados da posta en marcha e funcionamento das accións formativas previstas neste convenio

SEXTA. Compatibilidade con outras axudas

De acordo co disposto no artigo 40.1.d), do Decreto 11/2009, do 8 de xaneiro, polo que se aproba o Regulamento da Lei 9/2007, do 13 de xuño, de subvencións de Galicia, a achega económica prevista no presente convenio será compatible con outras subvencións, ingresos ou recursos para a mesma finalidade procedentes de calquera Administración ou entes públicos ou privados nacionais, da Unión Europea ou de organismos internacionais.

Con anterioridade á xustificación da execución da actividade O Consello Galego dos Procuradores dos Tribunais presentará unha declaración do conxunto de axudas solicitadas –tanto das aprobadas ou concedidas coma das pendentes de resolución– para un mesmo proxecto das distintas administracións públicas competentes ou das súas entidades vinculadas ou dependentes.

Procederá o reintegro parcial ou total dos fondos percibidos no suposto de incumprimento das condicións establecidas para a súa concesión nos termos previstos no título II da Lei 9/2007, do 13 de xuño, de subvencións de Galicia.

Así mesmo, ao abeiro do disposto no artigo 14.1.n) da Lei 9/2007, do 13 de xuño, de subvencións de Galicia, os criterios de gradación dos posibles incumprimentos para determinar a cantidade a minorar serán os seguintes:

- a) O incumprimento total dos fins para os que se concedeu a axuda, da realización dos gastos subvencionables ou da obriga de xustificación dará lugar á perda do dereito ao cobro ou, de ser o caso, ao reintegro da totalidade da axuda concedida.
- b) Calquera outro incumprimento parcial dos fins para os que se concedeu a axuda, da realización parcial do investimento subvencionable ou da obriga de xustificación considerárase incumprimento parcial e dará lugar á perda do dereito ao cobro ou, de ser o caso, á perda do dereito ao cobro na porcentaxe correspondente ao investimento non efectuado ou non xustificado.
- c) A realización de modificacións non autorizadas no orzamento subvencionable suporá a perda do dereito ao cobro.

No caso de que se produza un exceso das subvencións percibidas de distintas administracións públicas, o Consello Galego dos Procuradores deberá reintegrar o exceso e mais os xuros de mora, nos termos que establece o artigo 23 do Decreto 11/2009, do 8 de xaneiro.



SÉTIMA.-Vixencia.

O presente Convenio producirá efectos a partir da súa sinatura e ata o 31 de decembro de 2023.

OITAVA.- Xustificación e pagamento.

A Vicepresidencia Primeira e Consellería de Presidencia, Xustiza e Deportes fará o pagamento ao Consello Galego dos Procuradores unha vez que presenten a seguinte documentación xustificativa:

- Memoria de actuación, subscrita polo órgano competente da entidade, xustificativa do cumprimento das condicións impostas na concesión da subvención, con indicación das actividades realizadas, número de persoas usuarias ata a data, e dos resultados obtidos.
- Certificación da intervención ou do órgano que teña atribuídas as facultades de control da toma de razón en contabilidade e mais do cumprimento da finalidade para a que foi concedida a subvención, de acordo co establecido no artigo 28.5 da Lei 9/2007, do 13 de xuño, de subvencións de Galicia.
- Declaración do conxunto de axudas solicitadas –tanto das aprobadas ou concedidas coma das pendentes de resolución– para o mesmo proxecto ás administracións públicas competentes ou ás súas entidades vinculadas ou dependentes, así como aos entes privados.
- Declaración responsable de se achar ao corrente no cumprimento das obrigas tributarias e fronte á Seguridade Social, así como de non ter ningunha outra débeda coa Administración pública da Comunidade Autónoma.
- Calquera outra documentación ou material que o Consello Galego dos Procuradores dos Tribunais considere necesario presentar para unha mellor xustificación das actuacións obxecto do presente convenio.

A xustificación comprenderá os gastos de accións realizadas e pagadas entre o 1 de xaneiro de 2023 e o 15 de decembro de 2023, e deberá presentarse na Dirección Xeral de Xustiza con data límite o 15 de decembro de 2023. Non obstante, de acordo co establecido no artigo 62 do Decreto 11/2009, do 8 de xaneiro, polo que se aproba o Regulamento da Lei 9/2007, do 13 de xuño, de subvencións de Galicia, poderán realizarse pagamentos á conta por un importe de ata o 80% da porcentaxe subvencionada, correspondente aos pagamentos xustificados. Para o seu aboamento será necesario presentar a documentación antedita, agás a memoria de actuación.

En todo caso, a cantidade máxima que se obriga a achegar a Vicepresidencia Primeira e Consellería de Presidencia, Xustiza e Deportes reducirase na mesma proporción que represente a cantidade xustificada respecto do orzamento total presentado.



Dado que o crédito orzamentario desta subvención corresponde ao capítulo IV do orzamento de gastos da Vicepresidencia Primeira e Consellería de Presidencia, Xustiza e Deportes e que o Consello Galego dos Procuradores e unha institución sen ánimo de lucro, o citado Consello queda exonerado da constitución de garantía, de acordo co establecido no artigo 65.4, apartado f) do Decreto 11/2009, do 8 de xaneiro, polo que se aproba o Regulamento da Lei 9/2007, do 13 de xuño, de subvencións de Galicia.

NOVENA. Modificacións e resolución do convenio.

Conforme o disposto no artigo 17.4 da Lei 9/2007 toda alteración das condicións tidas en conta para a concesión da subvención, poderá dar lugar á modificación do convenio, sendo de aplicación das previsións ao respecto contidas na Lei 9/2007, do 13 de xuño, e no regulamento da dita lei.

O Consello Galego dos Procuradores poderá solicitar autorización previa e expresa para calquera modificación no orzamento inicial presentado, sempre que as actuacións estean comprendidas dentro do obxecto do convenio establecido na cláusula primeira e que o importe total do orzamento non varíe. As solicitudes de modificacións do convenio deberán estar suficiente motivadas e ser formuladas por escrito dirixido ao director xeral de Xustiza, que resolverá e notificará no prazo dun mes sobre a súa autorización ou denegación.

Así mesmo, o presente convenio poderá ser modificado por mutuo acordo das partes a través da subscrición da correspondente addenda modificativa, que deberá ser subscrita polas mesmas autoridades que asinan este, se as partes consideran necesaria introducir modificacións no convenio, motivadas pola necesidade de dotar unha maior achega económica ao mesmo, e, en todo caso, se as dispoñibilidades orzamentarias da Vicepresidencia Primeira e Consellería de Presidencia, Xustiza e Deportes así o permiten.

O presente convenio resolverase:

- a) Por incumprimento inxustificado, total ou parcial, dos compromisos establecidos.
- b) Por mutuo acordo, que deberá ser motivado e manifestado por escrito antes da finalización do Convenio.
- c) Pola desaparición das causas que motivaron a sinatura do Convenio ou polo transcurso do tempo fixado sen que se execute o investimento obxecto da subvención.

De se resolver o convenio, a Vicepresidencia Primeira e Consellería de Presidencia, Xustiza e Deportes poderá, se é o caso, esixir o reintegro das cantidades achegadas. Igualmente, de conformidade co disposto no artigo 17.3 da Lei 9/2007, do 13 de



xuño, procederá o reintegro do exceso percibido no suposto de que o importe da axuda -illada ou en concorrencia con subvencións e axudas, ingresos ou recursos- supere o custo da actividade subvencionada.

DÉCIMA.- Publicidade e confidencialidade

Este convenio será obxecto de publicación, de acordo co previsto na Lei 1/2016, do 18 de xaneiro, de transparencia e bo goberno da Administración pública galega. Así mesmo, incluírase no Rexistro Público de Axudas, Subvencións e Convenios, de conformidade co Decreto 132/2006, do 27 de xullo, polo que se regulan os rexistros públicos creados nos artigos 44 e 45 da Lei 7/2005, do 29 de decembro, de orzamentos xerais da Comunidade Autónoma de Galicia para o ano 2006, e mais co artigo 16 da Lei 9/2007, do 13 de xuño, de subvencións de Galicia.

En cumprimento do disposto nos artigos 18 e 20.8 da Lei 38/2003, do 17 de novembro, xeral de subvencións, comunicárase a subscrición deste convenio á Base de Datos Nacional de Subvencións, que opera como sistema nacional de publicidade de subvencións.

As partes asinantes do convenio manifestan o seu consentimento para que os datos persoais que constan neste convenio, así como o resto das especificacións contidas no mesmo, poidan ser publicados no Portal de transparencia e Goberno aberto.

As partes asinantes virán obrigadas en materia de protección de datos a cumprir co Regulamento (UE) 2016/679 do Parlamento Europeo e do Consello, do 27 de abril de 2016, relativo á protección das persoas físicas no que respecta ao tratamento de datos persoais e á libre circulación destes datos e polo que se derroga a Directiva 95/46/CE (Regulamento xeral de protección de datos), e coas demais disposicións vixentes sobre a materia.

O Consello Galego dos Procuradores en calidade de encargado do tratamento, realizará actividades de tratamento por conta da Vicepresidencia Primeira e Consellería de Presidencia, Xustiza e Deportes en calidade de responsable do tratamento, respecto aos datos de carácter persoal necesarios para a execución do presente convenio.

Así mesmo adaptarán as súas actuacións ao previsto na Lei Orgánica 3/2018, de 5 de decembro, de Protección de datos persoais e garantía dos dereitos dixitais, así como nas demais disposicións vixentes sobre a materia.

O tratamento de datos consistirá nas actividades necesarias para xestionar o presente convenio.

Igualmente comprométese a observar o establecido na Lei 39/2015, do 1 de



outubro, do procedemento administrativo común das administración públicas, no que se refire ao acceso limitado aos propios interesados en relación cos documentos que conteñan datos referentes á intimidade das persoas.

As partes asinantes do presente Convenio comprométense a destacar nas actividades que se realicen para a difusión das accións previstas no Convenio, a colaboración prestada polas outras partes asinantes.

DÉCIMO PRIMEIRA.- Natureza e interpretación.

O presente convenio ten natureza administrativa e rexerase polas cláusulas establecidas nel, quedando fóra do ámbito de aplicación da Lei 9/2017, do 8 de novembro, de Contratos do Sector Público, con independencia de que, ao abeiro do previsto no artigo 4 de dita norma, lle sexan de aplicación os principios desta lei para resolver as dúbidas e lagoas que se puidesen presentar.

Rexerase, así mesmo, pola Lei 9/2007, do 13 de xuño, de subvencións de Galicia, e mais polo Decreto 11/2009, do 8 de xaneiro, polo que se aproba o Regulamento da Lei 9/2007, do 13 de xuño, de subvencións de Galicia.

As cuestións litixiosas xurdidas da interpretación, desenvolvemento e aplicación do Convenio serán resoltas pola Vicepresidencia Primeira e Consellería de Presidencia, Xustiza e Deportes, poñendo os seus acordos fin á vía administrativa.

A orde xurisdicional contencioso-administrativa será a competente para resolver as cuestións litixiosas que se poidan suscitar entre as partes, conforme o establecido nos artigos 1 e 2 da Lei 29/1998, do 13 de xullo, reguladora da xurisdición contencioso-administrativa.

DÉCIMO SEGUNDA.- Comisión mixta de coordinación e seguimento.

Segundo o previsto na Lei 40/2015, do 1 de outubro, de réxime xurídico do sector público, créase a comisión de seguimento do convenio, á que lle corresponde velar polo cumprimento do pactado e pola boa marcha do mesmo.

As controversias sobre a interpretación e execución do presente convenio serán resoltas de mutuo acordo entre as partes no seo da comisión.

Para o seguimento da súa execución ou coñecemento de calquera cuestión sobre a súa interpretación, modificación, resolución ou efectos do mesmo que poidan xurdir, créase unha comisión mixta, que estará integrada por:

- Pola Vicepresidencia Primeira e Consellería de Presidencia, Xustiza e Deportes: o Director Xeral de Xustiza, ou persoa en quen delegue.
- Pola Consellería de Promoción do Emprego e Igualdade: a Secretaria Xeral da Igualdade, ou persoa en quen delegue.



- Polo Consello Galego dos Procuradores dos Tribunais: o seu Presidente, ou persoa en quen delegue.

DÉCIMO TERCEIRA. Normativa aplicable

O presente convenio de colaboración rexerase por:

- A Lei 9/2007, do 13 de xuño, de subvencións de Galicia e o Decreto 11/2009, do 8 de xaneiro, polo que se aproba o Regulamento da Lei 9/2007, do 13 de xuño, de subvencións de Galicia.
- Normativa básica da Lei 38/2003, do 17 de novembro, xeral de subvencións e do Real Decreto 887/2006, do 21 de xullo, polo que se aproba o Regulamento da devandita Lei.
- Acordo adoptado polo consello da Xunta de Galicia na súa reunión do día 27 de marzo de 1991 e feito público mediante Resolución da Consellería de Economía e Facenda de data 8 de abril de 1991, sobre convenios de cooperación con outros entes públicos e de colaboración con particulares.
- A Lei 1/2016, do 18 de xaneiro, de transparencia e bo goberno nos seus artigos 15 e 17.

E, en proba de conformidade cos termos do Convenio, asínase o mesmo na data da sinatura dixital.

O VICEPRESIDENTE PRIMEIRO E CONSELLEIRO DE PRESIDENCIA, XUSTIZA E DEPORTES A CONSELLEIRA DE PROMOCIÓN DO EMPREGO E IGUALDADE

Diego Calvo Pouso

Elena Rivo López.

O PRESIDENTE DO CONSELLO GALEGO DOS PROCURADORES DOS TRIBUNAIS

José Antonio Fandiño Carnero



La Xunta reclama financiación para asumir la reorganización de la Justicia

El TSXG pide que la sustitución de los juzgados de paz por oficinas judiciales se afronte «con amplitud de miras, medios materiales y responsabilidad»

JOSÉ MANUEL PAN
REDACCIÓN / LA VOZ

«Consenso, financiación y que haya una oficina de justicia donde hay un juzgado de paz. No queremos agrupaciones de juzgados de paz». Así concreta el director xeral de Xustiza en funciones, José Tronchoni, la postura de la Xunta sobre el anteproyecto de reorganización judicial aprobado el martes por el Consejo de Ministros. Esa reforma se asienta en tres grandes cambios: la creación de tribunales de instancia, uno por cada partido judicial (hay 45 en Galicia); la creación de una oficina judicial única para cada uno de esos tribunales, y la implantación de oficinas de justicia en los municipios, que sustituirán a los juzgados de paz y que, según el Gobierno, «seguirán cumpliendo su función social como punto de contacto con la ciudadanía».

La Xunta quiere el compromiso de mantener esa cercanía con las nuevas oficinas municipales de justicia, pues ya se opuso en su día a la desaparición de los 268 juzgados de paz que hay en Galicia, «por la estructura geográfica, por la dispersión poblacional y, también, por la realidad social gallega, con una población de avanzada edad», asegura el director xeral de Xustiza, que añade: «En otras zonas de España, los juzgados de paz están agrupados o mancomunados, pero en Galicia no podemos prescindir de esas oficinas. Que se le llame como quiera, pero que haya



Justicia en conflicto. Abogados manifestándose por las calles de Madrid a principios del mes de febrero, en una muestra más de la situación conflictiva que vive la Justicia en España. VÍCTOR LERENA EFE

una oficina judicial en cada concello en el que hoy hay un juzgado de paz», afirma. La reforma que creará los tribunales de instancia no suprimirá los actuales 275 órganos judiciales de Galicia. Lo que cambiará es su estructura y su nombre, pues seguirá habiendo los mismos juzgados, pero con una oficina única que repartirá los casos entre los jueces.

La postura de la Xunta es favorable a la reorganización, pero pide consenso con los operadores jurídicos, con los sindicatos y con las comunidades autónomas. «Y lo más importante, que haya financiación, porque es un cambio estructural muy grande que implica nuevas plazas, medios tecnológicos y una readaptación de las infraestructuras actuales. Y todo eso no se

puede hacer si no hay una financiación adicional del Estado», afirma Tronchoni.

La postura del TSXG

También ve necesaria una reforma el presidente del Tribunal Superior de Xustiza, José María Gómez y Díaz-Castroverde: «Habrá que esperar a ver el resultado final, pero no cabe duda de que en estos momentos es muy importante tomar medidas que mejoren la eficiencia de la Justicia en varios entornos, y, en este contexto, la solución de conflictos por medios alternativos a los judiciales, la organización territorial a través de los tribunales de instancia o la creación de procedimientos específicos para la protección de los consumidores son una buena noticia».

Respecto a los juzgados de paz, el presidente del Tribunal Superior reconoce que son «órganos que prestan un gran servicio a la Justicia, y hay que estar muy agradecidos a sus titulares». Y añade que «su desaparición en favor de las oficinas municipales de justicia es un reto muy importante que habrá que afrontar con amplitud de miras, medios materiales, y mucha responsabilidad».

Intranquilidad en los abogados

Más escéptico respecto al anteproyecto de reorganización de la Justicia se declara Augusto Pérez-Cepeda, presidente de los abogados gallegos. «Es necesaria una reorganización, pero habrá que ver cómo se lleva a cabo, porque no sabemos cómo va a quedar la supresión de los juzgados unipersonales de la que se habla». Y confiesa una cierta «intranquilidad» por la falta de información sobre los cambios anunciados por el ministro.

«Toda inversión en Justicia es necesaria, pero, por lo que sabemos, se están planteando cambios que son difíciles de llevar a cabo», sostiene José Antonio Fandiño, presidente del Consello Galego dos Procuradores, otro colectivo al que le afecta directamente la futura reforma. «La realidad es que cada vez tenemos más atasco judicial, y estamos reclamando desde hace tiempo más competencias en la ejecución de sentencias para poder poner al día los juzgados. Pero parece que eso es demasiado complicado», ironiza Fandiño.

MERCEDES FERNÁNDEZ JUEZA DE PAZ DE A LAMA DESDE HACE 34 AÑOS

«Nos cargan de funciones que no nos corresponden»

MARCOS GAGO
PONTEVEDRA / LA VOZ

Mercedes Fernández es jueza de paz en el municipio pontevedrés de A Lama, un municipio de poco más de 2.500 vecinos. Ejerce el cargo desde hace 34 años y sigue con la ilusión del primer día. Cuenta que se enteró por la prensa del anuncio del ministro Bolaños sobre la reestructuración de los juzgados de paz. Entiende que «el ministro lo que quiere es aunar, agrupar y suprimir los juzgados de paz como tal». Y cree que se los agrupará «con otro y aquí se quedará una oficina física, porque aquí tenemos libros desde 1874 con los nacimientos, matrimonios y defunciones de

gente que es de este municipio». Fernández se hizo jueza de paz casi por casualidad hacia el año 1990. «Yo vine a vivir a A Lama porque mi marido era director del Banco Pastor, que abrió aquí entonces una oficina, y yo, que soy de Ourense, había trabajado en el Juzgado de San Amaro y vi que se jubilaba la persona que estaba y me dije que me iba a presentar yo. Lo hice, y ahí quedé». Como ya trabajaba de auxiliar en el Registro Civil del municipio ourensano, ya conocía las funciones de un juez de paz, así que sabía lo que iba a hacer. «Para tener este puesto no hace falta ni ser abogado ni tener licencias especiales. Yo tengo mis estudios y me ayudan a esto. Lo



Mercedes Fernández dice que se hizo jueza de paz «casi por casualidad»

que te piden es que tengas más o menos unos conocimientos para dirimir actos de conciliaciones y ejercer la paz. Yo, si llevo aquí casi 40 años, será por algo».

Explica que los juzgados de paz en lugares de menos de cinco mil habitantes hacen funciones de Registro Civil. «Eso implica que cualquier persona nacida aquí puede venir a solicitar un certificado de nacimiento, de defunción, una fe de vida, de matrimonio; se celebran bodas, se ha-

cen las licencias de enterramiento...», precisa. Mercedes también se queja por la situación como juzgado de paz: «Nos están cargando funciones que no nos corresponden, porque, al tener aquí un centro penitenciario, todos los días hay dos, tres o quince notificaciones para la cárcel que tenemos que gestionar nosotros».

A lo largo de su dilatada trayectoria profesional, Mercedes Fernández ha visto cómo se han aplicado algunas mejoras sustanciales. «Los medios han mejorado, porque antes no había sistema informático alguno: las partidas de nacimiento y los certificados los tenían que escribir a mano. Antes había que usar la máquina de escribir, ahora está ya todo digitalizado».

Estafan casi 40.000 euros en Cambados con el timo del wasap del hijo en apuros

PONTEVEDRA / LA VOZ

La Guardia Civil investiga a cuatro personas como presuntos autores de un delito de estafa a un vecino de Cambados en el marco de la operación Ruliña, a cargo del Equipo de Investigación Tecnológica de la Unidad Orgánica de Policía Judicial de la Comandancia de la Guardia Civil de Pontevedra.

La investigación se inició en mayo del 2023 tras conocer la existencia de una nueva víctima del llamado timo del hijo en apuros, consistente en contactar desde un número desconocido, generalmente a través de mensajería instantánea, haciéndose pasar por el hijo de la víctima con el pretexto de la rotura o pérdida del teléfono móvil. En esta ocasión, el perjudicado recibió un wasap en el que su interlocutor le informaba de un cambio de línea telefónica haciéndose pasar por su hija y solicitándole dinero para satisfacer unos pagos pendientes. Esta persona, convencida de que estaba comunicándose con su hija, realizó once transferencias a distintas cuentas bancarias, ascendiendo la cuantía estafada a un importe de 39.731,08 euros.

«Tanto del análisis de la información documental como del estudio de las transacciones existentes se concluye la existencia de una organización, con integrantes de entre 21 y 27 años, dando como resultado la identificación de cuatro personas asentadas en Barcelona y con antecedentes policiales por hechos similares, los cuales son investigados por su presunta implicación en un delito de estafa y blanqueo de capitales», según informa el instituto armado.

«Los cibercriminales efectuaron un movimiento rápido de la cuantía defraudada. De las once transferencias iniciales, al contar con múltiples actores involucrados en el fraude, emitían a su vez nuevas transferencias, realizaban compras online y disposiciones en cajeros, probablemente en un intento por eludir la actividad policial, indicios de las conductas relacionadas con el blanqueo de capitales».

Las diligencias han sido entregadas en el juzgado que estaba de guardia en Cambados. La Guardia Civil recomienda no dejarse llevar por la urgencia, contactar con los hijos a través de los canales habituales o, en su defecto, con algún familiar o amigo cercano.



OURENSE

Acusa al cliente de su pub al que echó de quemar el coche familiar

El inculcado solo admite un altercado porque un compañero encendió un cigarro dentro

M. SÁVIOREZ OURENSE
fotografía de prensa

La noche del 23 de julio de 2022 fue complicada para un grupo de trabajadores de la brigada forestal beltransportada de San Xoán de Río. Hubo un incendio, pero no forestal. Ardió el coche del padre del encargado del pub O Candello, situado en la plaza del Rei xó de Trives. Uno de ellos, Adrián L.F., como conocido como "el Francés" se sentó ayer en el banquillo del Penal 2 acusado de un delito de amenazas y otro de daños. El fiscal y la acusación particular pidieron una pena de 11 meses de prisión y 12 meses multa (a razón de 8 euros al día).

El inculcado y sus amigos fueron expulsados del local hostelería porque uno de ellos, que ayer admitió que iba muy bebido, encendió un cigarrillo en el interior. La bronca, con forcejeos y algo de sangre porque resultó herido, siguió fuera hasta

que los bomberos forestales optaron por irse a sus casas. Adrián, según el denunciante, amenazó con "prender fuego" al coche, a la casa de sus padres, con ellos dentro, y al local, además de cortarle el cuello. En ese momento, estaba solo y el responsable del pub había salido a echar la basura al contenedor con la ayuda de un amigo, que confirmó su versión. "Fui por que é unha persoa moi impulsiva", aseguró el perjudicado.

A los 20 minutos, comenzó a arder el Suzuki Grand Vitara propiedad del padre del dueño del pub, que estaba estacionado a la puerta de la casa familiar. La Guardia Civil halló un trapo debajo del depósito. El dueño del vehículo reclama los 3.815 euros que costó la reparación. No llegó a arder del todo porque, según relató, se levantó de la cama al ver el resplandor del fuego y lo apagó "colleando a mangueira".



El acusado, Edrien L.D., ayer en el juicio en el Penal 2 de Ourense.

Adrián, al que algunos testigos tildaron de conflictivo, con una condena de la Audiencia en 2018 por lesiones agravadas, solo admitió palabras broncas cuando los echaron del bar. "Insultos se podieron decir pero nada más", aseguró. "Nos echaron a golpes de ahí y un compañero salió sangrando", añadió. Después del altercado, asegura que cada uno se fue para su casa. En su caso, cogió el coche, aunque reside en Trives, no demasiado lejos del pub. La denuncia la justifica en un deseo de "querer fastidiarme" porque la relación no es demasiado cordial.

Los compañeros de brigada confirmaron la pelea previa y el enojo del acusado: "estaba muy alterado", aunque uno de ellos testificó que cuando se zanjó el rifirrafe se fue en el coche. La chispa que provocó el incidente, el joven que encendió el cigarrillo en el interior del pub y que llegó asangrado, admitió que "iba muy bebido" y que a la mañana siguiente no recordaba nada. La acusación particular resaltó que, aunque nadie vio a Adrián prender fuego, "hay muchas pruebas indiciarias", recordando que solo 30 minutos antes amenazó con quemar el coche. "Esto no es casualidad, sino causalidad", aseguró el abogado. Sus propios amigos, recordó, aseguran que quedó "muy alterado".

El letrado de la defensa recordó que "el ordenamiento jurídico impide sentencias condenatorias basándose en conjeturas y especulaciones de lo que pudo suceder". También apuntó la deficiente instrucción ya que no se pidieron imágenes de las cámaras de seguridad de un banco cercano o datos de geolocalización. "Las posibilidades son varias y la duda es razonable", apuntó en el trámite de informe para intervenir la absolución. ■

Breve

En busca y captura por una agresión en un bar de la ciudad

Un colombiano de 28 años está en busca y captura para que responda del delito de lesiones del que está acusado por el incidente en el bar Wonder de la ciudad. La acusación pública sostiene que el inculcado protagonizó una discusión con otro cliente a las 15.15 horas del día del 23 de junio de 2020. En un momento dado, según esa versión, con el puño cerrado, con un puñetazo de cristal, asestó un puñetazo al denunciante, al que rompió la nariz.

La fiscalía reclama tres años de prisión por un delito de lesiones con instrumento peligroso, además de una indemnización de 6.478 euros. El juicio estaba señalado para ayer en el Juzgado Penal 2 pero tuvo que suspenderse porque el inculcado sigue sin aparecer. ■

Afila tu inconformismo

Súmate al equipo de periodistas de La Región en Ourense, A Limia, O Ribeiro y Valdeorras

rrhh@laregion.net

FOTONOTICIA



Los procuradores se forman en violencia de género

Julían Pardinas Sanz, fiscal especialista en violencia contra la mujer, Ana María López Calvete, decana del Colegio de Procuradores de Ourense, y Carlos Vázquez Cid, inspector de Policía y jefe de la Unidad de Atención a la Familia y Mujer (UFAM), estuvieron en la primera jornada del Curso de Formación Continuada en Violencia de Género. El curso está organizado por el Colegio de Procuradores de Ourense, el Consello Galego dos Procuradores y la consejería de Política Social e Igualdade de la Xunta de Galicia. ■



Un fisioterapeuta causó un neumotórax bilateral a una paciente con unas agujas

«No me informó de las consecuencias ni riesgos; empecé a toser mucho y dijo algo que me quedó grabado: ‘Aquí no era’», relata la víctima | El acusado cree que aplicó bien la técnica

J. FRAIZ
Ourense

La punción seca es una técnica que consiste en le aplicación de agujas y que se utiliza en fisioterapia para acceder al área muscular a través de la piel. Es una práctica invasiva, indicada para ciertas dolencias pero que requiere pericia, precaución y un consentimiento informado a los pacientes, porque existen riesgos para la salud. La Fiscalía y la acusación particular solicitan la condena de un fisioterapeuta, M., juzgado este viernes en Ourense por una presunta negligencia grave. Una joven paciente a la que atendió en junio de 2019 en una clínica de la ciudad sufrió un neumotórax bilateral, en ambos pulmones, tras las punciones realizadas por el encausado en una sesión, la segunda que tenía con él. «No me informó, simplemente me dijo el nombre de la técnica pero no me informó de las consecuencias, de los riesgos ni nada», relató la perjudicada en el juicio. Por el contrario, el encausado mantiene que sí le dio alguna información, aunque se excusó en la falta de tiempo de las sesiones, por la carga de trabajo de atender «a entre 10 y 15 pacientes» de media por jornada. «Se pasa por encima, no se dice todo específicamente porque es imposible, pero sí se cuenta lo básico. Se le comenta que hay unos peligros, pero disponemos de poco tiempo y no podemos abarcarlo todo. Le pedí permiso para hacer la técnica, le dije que tendría dolor al día siguiente y me dijo que sí», expuso el acusado en su declaración. El sanitario insertó las agujas en ambos hombros, donde la chica sentía dolor por una contractura. Ella estaba tumbada boca abajo y él realizó el abordaje situado frente a



El fisioterapeuta acusado, durante su declaración en el juicio penal, este viernes. | FdV

su cabeza. En una sesión anterior, ya había usado la técnica —afirma la joven, él no— pero en la segunda a ella le llamó la atención el tamaño de las agujas que empleó. En aquella época estaba muy delgada. En un momento de la intervención, la paciente sintió ganas de toser. «Intentaba aguantarme pero ya no pude, tosi mucho y él me dijo un comentario que me quedó grabado: ‘Aquí no era’», declaró la perjudicada en el juicio. El encausado sostiene que la paciente no se quejó en ningún momento. Según su versión, utilizó una mano para asir y separar el sector muscular del trapecio, clavando con la otra la aguja «en dirección al suelo», subraya el acusado. Según la víctima, lo hizo en «dirección a mis pies, recto, hacia abajo, por la zona próxima al cuello», precisó. «Realicé la técnica como me enseñaron,

considero que estuvo bien aplicada, estaba indicada y era necesaria, porque la paciente no había mejorado con un tratamiento conservador», expuso el profesional.

Una semana hospitalizada

La joven se fue a casa a pie, con molestias que atribuyó en ese momento a las normales tras la técnica. Pero cuatro horas después sintió dificultades respiratorias y, asustada, fue a urgencias. Los cirujanos tuvieron que ponerle drenajes en el pulmón. Pasó una semana ingresada en el hospital. Estuvo mes y medio sin poder trabajar. «Los médicos me dijeron que durante un tiempo no podría viajar en avión ni bucear. Estaba en tratamiento psicológico y esto lo empeoró. Lloraba por miedo a nadar, a bucear, a quedarme bajo el agua sin respiración. Volví varias

veces a urgencias a hacerme placas porque tenía miedo de tener otra vez un neumotórax, tenía esas sensaciones, estaba intranquila y nerviosa», contó la perjudicada.

¿Por qué resultó lesionada la paciente? El encausado esgrime la posibilidad de que «la contractura estuviera tan adherida, y el tejido demasiado fibrosado, que la aguja, al ser flexible, rebotó y no fue en la dirección adecuada». Un informe pericial aportado por la defensa apunta a que es un riesgo posible, aun aplicando correctamente el protocolo. Según esta línea, si es tal la rigidez del punto gatillo del músculo puede confundirse con la que ofrece a la punción la pleura pulmonar. La distancia entre ambas estructuras es mínima. «No detecto mala praxis, son accidentes que pueden ocurrir», indicó.

El forense dijo que «el espacio

de seguridad» entre el trapecio superior y el vértice superior del pulmón «es pequeño». Aprecia aquí «una cuestión de destreza y de habilidad, quizá profundizó un poco más de lo debido. Con unas agujas como las de la punción seca puede ocurrir si te pasas», indicó. «Por sentido común» es conveniente «adaptar la técnica al paciente», teniendo en cuenta la complexión. También ve «necesario» ofrecer un consentimiento informado para que el paciente, conociendo los riesgos, decida si acepta la técnica.

La Fiscalía solicita una condena de multa de 1.920 euros más 8 meses de inhabilitación para el ejercicio de la fisioterapia. La acusación particular pide 4 meses de prisión y año y medio de inhabilitación. La Fiscalía propone unos 3.500 euros de indemnización y la acusación particular, casi 9.000.

«Hubo un error terapéutico grave, faltó el consentimiento, no se informó a la víctima de las consecuencias negativas que podría tener la intervención». La fiscal ve una «ineptitud manifiesta» en la actuación del profesional. Las dos acusaciones piden que la clínica sea responsable civil subsidiaria, aunque el director del centro sanitario aseguró que «en 30 años jamás se han comprado agujas para punción seca en la clínica, es una técnica que no utilizamos», sino que el acusado empleó por su propia iniciativa, llevando el por tanto el material, añadió el empresario. El encausado, que carece de antecedentes penales, ya no trabaja en la clínica de Ourense en la que ocurrieron los hechos. Empezó en ese puesto en mayo de 2018. En la actualidad ejerce en Extremadura.

Menos de cuatro meses antes, en marzo de 2019, realizó un curso sobre punción seca, con 40 horas de formación en dos fines de semana. El fisioterapeuta asegura que, incluyendo las prácticas en la carrera y las ocasiones que la usó en sesiones con pacientes, la llegó a aplicar «miles» de veces. Aunque se trata de una práctica «muy común en la fisioterapia», esperó a contar con el curso específico para aplicarla en las sesiones. En la actualidad ya no la utiliza, admite.



La magistrada Susana Pazos, durante su intervención. | Cedida

Formación con perspectiva de género para los procuradores sobre violencia machista

REDACCIÓN
Ourense

La magistrada del juzgado de lo Penal Número 2 de Ourense, Susana Pazos Méndez, la psicóloga del Instituto de Medicina Legal de Galicia (Imelga) Iria González Cal así como la letrada especializada en violencia de género Victoria Dié-

guez Guerrero participaron en un curso de formación continuada en materia de violencia de género, dirigido al colectivo profesional de procuradores. Las ponentes de este viernes hablaron, respectivamente, de la aplicación del derecho con una perspectiva de género, de la valoración de las víctimas en el servicio

forense, así como de las circunstancias especiales que dificultan el proceso de presentar denuncia en algunas situaciones. El curso de formación fue organizado por el Colegio de Procuradores de Ourense, el Consello Galego dos Procuradores y por la Consellería de Política Social e Igualdade, de la Xunta de Galicia.



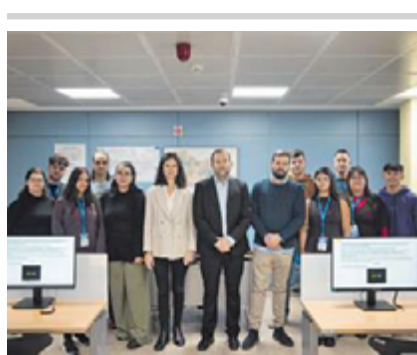
Niegan la indemnización a una funcionaria que reclamó por el cese como interina en su plaza

OURENSE / LA VOZ

La Sala General de la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG), formada por 19 magistrados y magistradas, rechazó que la Xunta tenga que indemnizar con 32.000 euros a una asistenta social que, en 2016, obtuvo —a través de una sentencia y tras permanecer en el puesto como interina desde 2007— la condición de indefinida no fija; la demandante reclamaba esa cantidad por fraude y abuso de la contratación temporal o, subsidiariamente, diez mil euros por haber cesado en la plaza que venía ocupando como personal laboral indefinido no fijo. En 2023 tomó posesión de esa misma plaza como funcionaria de carrera al haber superado el proceso selectivo convocado. Así, el alto tribunal gallego

confirma la sentencia del Juzgado de lo Social 1 de Ourense, que había desestimado la pretensión de la demandante, «al considerar que el hecho de que siga prestando servicios después de haber superado un proceso selectivo con la condición de funcionaria y haya, como consecuencia de ello, estabilizado su relación con la Administración demandada, no permite considerar que tenga derecho a ninguna de las indemnizaciones que reclama».

El hecho de que la demandante sea la misma que cubrió, ya como funcionaria, la plaza hace que no proceda indemnización. Considera la Sala que no ha habido «ningún perjuicio, dado que ha pasado a una situación más favorable». Seis de los magistrados defendían que sí debía acceder a indemnización.



LA IMAGEN

Clase práctica en la DGT

Los alumnos del Ciclo Superior de Formación para a Mobilidade Segura e Sustentable visitaron la sede en Ourense de la Jefatura de Tráfico y conocieron cómo funcionan los exámenes teóricos para el carné de conducir. La actividad estaba organizada por la Asociación Provincial de Autoescuelas de Ourense.

Fue a curarse una contractura y acabó con un neumotórax: «No podía respirar y me asusté»

Atribuyen al fisioterapeuta un delito de lesiones imprudentes

M. V. OURENSE / LA VOZ

En junio del año 2019 una joven acudió a una clínica de fisioterapia de Ourense para que le trataran una contractura que tenía el hombro derecho. Tras la tercera sesión, en la que el profesional practicó con ella una técnica de punción, empezó a notar que respiraba mal. Se lo dijo a sus padres y la llevaron a urgencias. Le detectaron un neumotórax y enseguida la llevaron al quirófano, donde fue operada.

Este viernes el fisioterapeuta que atendió a la paciente se sentó en el banquillo de acusados del Juzgado de lo Penal dos de Ourense. Se le acusa de un delito de lesiones por imprudencia grave por el que podrían condenarlo a penas de prisión de hasta un año y medio, además de la inhabilitación. En el asunto también se acusa al propietario de la clínica.

«Aquel día era la segunda vez que me aplicaba la punción seca», relató la denunciante durante la vista, recordando el momento de los hechos. Contó que esa misma semana el profesional ya la había tratado con esa técnica y que no había tenido efectos secundarios que fueran más allá de alguna molestia en la zona.

«Uy, aquí no era»

Durante la segunda sesión, mientras le colocaba las agujas, sintió ganas de toser e intentó reprimir las, hasta que no pudo más. «El paró y dijo “uy, aquí no era”», recordó la perjudicada, que aseguró que tras ese descanso el fisioterapeuta continuó con la punción. «Me dijo que tenía mucho músculo y que necesitaba unas agujas más grandes; salió a buscarlas y continuó», explicó la paciente, relatando que unas horas después empezó a notar pinchazos en el pecho al respirar.



El acusado dice que aplicó la punción correctamente. MIGUEL VILLAR

«Cuando vi que no podía coger aire me asusté», explicó. Estuvo un mes y medio de baja.

El perito del Imelga que hizo un informe sobre lo ocurrido atribuyó la lesión que tuvo la joven a la técnica que le aplicaron en la clínica de fisioterapia. Recordó que este tipo de tratamientos requieren una formación específica y ve recomendable que, cuando se aplican, se informe al paciente de los riesgos que entrañan, para que pueda decidir. Aunque calificó el neumotórax de leve, aclaró que hubo perforación en los dos pulmones. «La aguja penetró demasiado», explicó el experto.

Libertad para usar técnicas

Pero el profesional asegura que no hubo complicaciones durante la sesión. Relató que llevaba cuatro meses trabajando cuando atendió a la paciente y explicó que en la clínica le daban libertad para utilizar las técnicas

que creyera convenientes con los pacientes. También reconoció que no le dio a la víctima un consentimiento informado para que lo firmara y que las explicaciones sobre la punción se las ofreció «por encima» ya que tenía poco tiempo para atenderla. «La técnica era necesaria», aseguró, atribuyendo la lesión a que la aguja rebotó debido a la densidad de la contractura. «Seguí todos los protocolos», insistió.

El propietario de la clínica, que en caso de condena respondería como responsable civil, dijo que nunca autorizó al acusado a utilizar la punción con los pacientes porque él apostaba por otros métodos y afirmó que el material para este tipo de tratamientos no se compró desde su centro médico. «Las agujas las tuvo que traer él de casa», dijo sobre este caso concreto.

Ahora la última palabra sobre el caso la tiene la magistrada encargada del caso.



6. EXPEDIENTES

A lo largo del año 2024 se han tramitado desde el Consello Galego dos Procuradores 3 expedientes y 3 diligencias informativas.

